



Concepción, viernes 04 de noviembre de 2022.-

**Señor
Ricardo Yáñez Reveco
General Director
Carabineros de Chile
Presente**

Estimado General Director:

Junto con saludar, por medio de esta carta vengo a exponer la situación que la familia del Cabo 1ro. Felipe Aarón Monsalves Rodríguez, RUT 17.036.442-2, me ha expuesto durante mi recorrido por las comunas que represento en la Región del Bio Bio.

El Cabo 1ro. Monsalves, con cerca de 14 años de servicio en la institución, actualmente se desempeña en la Primera Comisaría de Concepción, en la Región del Bio Bio, donde reside junto a su pareja y 2 hijos, siendo además el principal apoyo de sus padres, una pareja de adultos mayores que residen en la comuna de Curanilahue, provincia de Arauco.

Sin embargo, hace algunos días se enteró por medio del Boletín de Traslados que, a partir del próximo 02 de enero de 2023, deberá prestar servicios en la Prefectura Marga Marga, de la Región de Valparaíso, lo cual resulta del todo complejo para su familia.

Lo anterior implica un serio problema para la familia del Cabo 1ro. Monsalves, ya que hace poco tiempo compró una vivienda junto a su pareja, quien logró encontrar un empleo estable con contrato en la zona, a lo que se suma las dificultades del cambio de colegio de los hijos.

Considerando lo anteriormente expuesto, es que la familia me ha solicitado hacer presente esta situación ante el Alto Mando de Carabineros de Chile e interceder para que este traslado sea reconsiderado, y se permita al Cabo 1ro. Monsalves continuar destinado dentro de la Región del Bio Bio, de manera de no complicar el desarrollo y acompañamiento de su familia.

Sólo me resta agradecer de antemano su buena disposición para recibir y estudiar esta solicitud, y aprovecho la oportunidad para reiterar mi compromiso con el trabajo diario que realiza Carabineros de Chile por el bienestar de los chilenos, particularmente en la región del Bio Bio, la cual represento en el Senado de la República.

Atentamente,

**ENRIQUE VAN RYSELBERGHE HERRERA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
REGIÓN DEL BIO BIO**

TEXTO COMPARADO DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODERNIZA LOS DELITOS QUE SANCIONAN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ESTABLECE TÉCNICAS ESPECIALES PARA SU INVESTIGACIÓN (BOLETÍN N° 13.982-25).

TEXTO LEGAL VIGENTE	TEXTO APROBADO EN GENERAL POR EL SENADO	INDICACIONES	
		<p><u>DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE LEY</u></p> <p>1.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:</p> <p>“Proyecto de ley que ACTUALIZA los delitos que sancionan la delincuencia organizada, aplica comiso de ganancias y establece técnicas especiales para su investigación”.</p>	<p align="center">A FAVOR</p> <p>Se cambia el nombre del proyecto, sumando el concepto del comiso.</p> <p align="center">APROBADO 4X0X0</p> <p><i>“Se cambio moderniza por actualiza.”</i></p>
<p align="center">CÓDIGO PENAL LIBRO PRIMERO Título Tercero De las penas.</p> <p align="center">§ I. De las penas en general.</p> <p>ART. 20.</p> <p>No se reputan penas, la restricción o privación de libertad de los detenidos o sometidos a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales, la separación de los empleos públicos</p>		<p align="center"><u>ARTÍCULO 1</u></p> <p align="center">Números nuevos</p> <p>2.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para anteponer los siguientes números 1 a 9, nuevos:</p> <p>“1. Incorpórase, en el artículo 20, el siguiente inciso segundo, nuevo:</p>	

acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones o por el tribunal durante el proceso o para instruirlo, ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinal o atribuciones gubernativas.			
		“Tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito, ni cualquier forma de comiso sin condena prevista por la ley.”.	A FAVOR Se determina que debe haber una pena para aplicar el comiso APROBADA 4X0X0
<p align="center">§ II.</p> <p align="center">De la clasificación de las penas.</p> <p>ART. 24.</p> <p>Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables.</p>			
		2. Introdúcese un artículo 24 bis, nuevo, del siguiente tenor: “ ARTÍCULO 24 BIS. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito, CUANDO LAS HUBIERE . Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere a la	<p align="center">A FAVOR</p> <p>Se incorpora y regula la nueva figura del comiso de las ganancias del delito en el Código Penal, así como definir qué se entiende como una ganancia.</p> <p align="center">APROBADO 3X0X0 <i>Con modificaciones. Se deja la frase “cuando las hubiere”</i></p>

		<p>Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.</p> <p>En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.</p> <p>La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva.</p> <p>Si un mismo bien pudiere ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme a los artículos 31, 31 bis y 31 ter, sólo se aplicará lo dispuesto en este artículo.”.</p>	
		<p>3. Incorpórase un artículo 24 ter, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“ARTÍCULO 24 TER. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se define a las personas, y las condiciones, por las cuales se hace extensivo el comiso por ganancias pese a no haber intervenido directamente en el delito.</p> <p>APROBADO 5X0X0</p>

		<p>1ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen.</p> <p>2ª. Si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés.</p> <p>3ª. Si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición.</p> <p>4ª. Si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”.</p>	
<p>§ III. De los límites, naturaleza y efectos de las penas. Penas que llevan consigo otras accesorias.</p> <p>ART. 31. Toda pena que se imponga por un crimen o un simple delito, lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito.</p>		<p>4. Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente: “ARTÍCULO 31. Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiera sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito y que fuere especialmente apta para ser empleada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente, en todo caso, aquellas cosas cuya tenencia o porte se encuentra en general prohibida por la ley.</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se determina el comiso de todas las cosas empleadas para cometer un delito (armas, vehículos, etc.)</p> <p>APROBADO 5X0X0 <i>Ad referendum de definir si será indicación sustitutiva o complementaria al artículo original.</i></p>

		<p>El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aun en caso de que el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. En este caso, el comiso será impuesto de conformidad con el procedimiento establecido en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.</p> <p>El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto de terceros de buena fe y que tengan título para poseer la cosa, a menos que se estableciera que el dueño no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor.</p> <p>En el caso de que el comiso afecte a un tercero de buena fe y que no tenga responsabilidad por el hecho, éste podrá solicitar indemnización del hechor.”.</p>	
		<p>5. Agrégase un artículo 31 bis, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“ARTÍCULO 31 BIS. El comiso de una cosa que no sea especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que haya servido de instrumento en la perpetración del hecho sólo será impuesto en la sentencia condenatoria y siempre que la cosa hubiere sido utilizada en la perpetración de un delito.</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se regula el comiso de cosas que no son aptas para el delito, pero que si haya sido utilizada para perpetrar uno.</p> <p>APROBADO 5X0X0</p>

		El comiso de una cosa que no sea especialmente apta para ser utilizada delictivamente no procederá respecto de terceros de buena fe. El tribunal prescindirá de su imposición cuando la privación de su propiedad le ocasionare un perjuicio desproporcionado al afectado.”.	Se elimina el concepto “doloso” del final del inciso primero.
		<p>6. Agrégase un artículo 31 ter, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“ARTÍCULO 31 TER. Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración del hecho.</p> <p>El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez aun si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. En este caso, el comiso será impuesto de conformidad con el procedimiento establecido en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.</p> <p>El comiso de los efectos del hecho no procederá respecto del tercero de buena fe.</p> <p>Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.”.</p>	<p>A FAVOR</p> <p>El artículo se pone en el caso de que se puede aplicar el comiso sobre las ganancias de un delito comprobado por la justicia, aun cuando la persona sea absuelta como presunto autor de ese delito.</p> <p>APROBADO 5X0X0</p>

<p>ART. 48.</p> <p>Si los bienes del culpable no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:</p> <p>1.º Las costas procesales y personales.</p> <p>2.º El resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio.</p> <p>3.º La reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.</p> <p>4.º La multa.</p> <p>En caso de un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán, considerándose como uno solo, entre los que no gozan de preferencia.</p>		<p>7. Sustitúyese el artículo 48 por el siguiente:</p> <p>“ARTÍCULO 48. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:</p> <p>1. El comiso de las ganancias provenientes del delito o, en su caso, del valor equivalente a los efectos o instrumentos del delito.</p> <p>2. Las multas.</p> <p>3. Las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio.</p> <p>4. La reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.</p> <p>5. Las costas personales.</p> <p>Cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuere posible satisfacer la indemnización de perjuicios derivada del delito por falta de bienes realizables, el perjudicado podrá ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos del número 1, o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. El Estado podrá excepcionarse del pago demostrando la</p>	<p style="text-align: center;">A FAVOR</p> <p>Se incorpora el comiso de ganancias en la norma que regula el cómo el condenado cubrirá las responsabilidades económicas de su delito y juicio.</p> <p>Además, se regula la posibilidad de que las víctimas puedan recurrir a estos bienes decomisados para obtener una indemnización de perjuicios.</p> <p style="text-align: center;">APROBADO 4X0X0</p> <p><i>El ejecutivo pide plazo para mejorar la redacción y resguardar de mejor manera los derechos de las víctimas en caso de indemnización (si debe recurrir a sede civil o en el mismo juicio).</i></p> <p><i>Se determina que el punto se modifica más adelante en el artículo N°171 del COT.</i></p>
--	--	--	--

		<p>existencia de bienes realizables sobre los cuales pudiere hacerse efectiva la indemnización, o que ella no hubiere podido ser satisfecha por negligencia del perjudicado.</p> <p>En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”.</p>	
<p>§ IV. De la aplicación de las penas.</p> <p>ART. 60. La multa se considera como la pena inmediatamente inferior a la última en todas las escalas graduales.</p> <p>Para fijar su cuantía respectiva se adoptará la base establecida en el art. 25, y en cuanto a su aplicación a cada caso especial se observará lo que prescribe el art. 70.</p> <p>El producto de las multas, ya sea que se impongan por sentencia o que resulten de un decreto que conmuta alguna pena, ingresará en una cuenta fiscal, especial, contra la cual sólo podrá girar el Ministerio de Justicia, para algunos de los siguientes fines, y</p>		<p>8. Elimínanse, en el artículo 60, sus incisos tercero, cuarto, quinto y sexto.</p>	<p><i>El ejecutivo señala que por error quedó el inciso N°6 dentro de la indicación, pero que este queda vigente, por lo que los municipios siguen recibiendo los fondos de las multas.</i></p> <p>APROBADO 5X0X0</p> <p><i>Se dividió en dos: A.- eliminación de los incisos 3, 4 y 5. B.- Se modifica el inciso 6 en su parte final, para eliminar la frase “donde se cometió el delito que se castiga”.</i></p>

<p>en conformidad al Reglamento que para tal efecto dictará el Presidente de la República:</p> <p>1.- Creación, instalación y mantenimiento de establecimientos penales y de reeducación de antisociales;</p> <p>2.- Creación de Tribunales e instalación, mantenimiento y desarrollo de los servicios judiciales, y</p> <p>3.- Mantenimiento de los Servicios del Patronato Nacional de Reos.</p> <p>La misma regla señalada en el inciso anterior, se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas, de los dineros que caigan en comiso y del producto de la enajenación en subasta pública de las demás especies decomisadas, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.</p> <p>Las disposiciones de los dos incisos anteriores no son aplicables a las multas señaladas en el artículo 483-b.</p> <p>El producto de las multas, cauciones y comisos derivados de faltas y contravenciones, se aplicará a fondos de la Municipalidad correspondiente</p>			
---	--	--	--

al territorio donde se cometió el delito que se castiga.			
<p>LIBRO SEGUNDO Título Sexto. De los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares. § II bis. De la obstrucción a la investigación.</p> <p>ART. 269 ter.</p> <p><u>El fiscal del Ministerio Público, o el abogado asistente del fiscal,</u> en su caso, que a sabiendas ocultare, alterare o destruyere cualquier antecedente, objeto o documento que permita establecer la existencia o inexistencia de un delito, la participación punible en él de alguna persona o su inocencia, o que pueda servir para la determinación de la pena, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados e inhabilitación especial perpetua para el cargo.</p>		<p>9. Sustitúyese, en el artículo 269 ter, la expresión “El fiscal del Ministerio Público, o el abogado asistente del fiscal” por “El agente policial, fiscal del Ministerio Público, o el abogado asistente del fiscal”.”.</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se incorpora dentro de la figura de obstrucción a la justicia a los “agentes policiales”.</p> <p>APROBADO 5X0X0</p> <p><i>Se cambia el “agentes policiales” por el concepto de “funcionarios policiales”.</i></p>
	<p>“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:</p> <p>1. Reemplázase el Párrafo X del Título VI del Libro Segundo por el siguiente:</p>	<p><u>Número 1</u></p> <p>3.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el número 1, consultado como número 10, por el siguiente:</p> <p>“10. Reemplázase el Párrafo X del Título VI del Libro Segundo por el siguiente:</p>	

<p>§ X. De las asociaciones ilícitas.</p> <p>ART. 292. Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse.</p> <p>INCISO DEROGADO.</p>	<p>“§ X. De las asociaciones delictivas y criminales”</p> <p>ART. 292. El que tomare parte en una asociación delictiva será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. La pena será de presidio menor en su grado máximo si la participación consistiere en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla, o en haberla fundado o contribuido a fundarla.</p> <p>Se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por tres o más personas que tuviere entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de delitos.</p> <p>Lo previsto en este artículo no se aplicará cuando se trate de hechos constitutivos de falta.</p> <p>Para los efectos de apreciar la existencia de una organización se considerará la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo.</p>	<p>“§ X. De las asociaciones delictivas y criminales</p> <p>ARTÍCULO 292. El que tomare parte en una asociación delictiva será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio.</p> <p>La pena será de presidio menor en su grado máximo si la participación consistiere en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos o medios, o en haberla fundado.</p> <p>Se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tuviere entre sus fines la perpetración de simples delitos.</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se mejora la redacción para la figura de asociación delictiva, eliminando criterios como cantidad de miembros, recursos y capacidad de planificación.</p> <p>APROBADO 5X0X0</p> <p>PENDIENTE <i>El ejecutivo presentará una nueva redacción para incluir en el artículo la figura del “grupo delictivo”.</i></p>
---	---	--	---

<p>ART. 293. Si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados.</p> <p>Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de simples delitos, la pena será presidio menor en cualquiera de sus grados para los individuos comprendidos en el acápite anterior.</p>	<p>ART. 293. El que tomare parte en una asociación criminal será sancionado con presidio menor en su grado máximo. La pena será presidio mayor en su grado mínimo si la participación consistiere en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o en haberla fundado o contribuido a fundarla.</p> <p>Se entenderá por asociación criminal toda organización formada por tres o más personas que tuviere entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes.</p> <p>Si la asociación tuviere entre sus fines la perpetración de crímenes y simples delitos se aplicarán las sanciones dispuestas en el inciso primero.</p>	<p>ARTÍCULO 293. El que tomare parte en una asociación criminal será sancionado con presidio menor en su grado máximo.</p> <p>La pena será presidio mayor en su grado mínimo si la participación consistiere en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos o medios, o en haberla fundado.</p> <p>Se entenderá por asociación criminal toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tuviere entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes.</p> <p>Si la asociación tuviere entre sus fines la perpetración de crímenes y simples delitos se aplicarán las sanciones dispuestas en el inciso primero.</p>	<p>APROBADO</p> <p>5X0X0</p>
		<p>ARTÍCULO 293 BIS. Será sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el que, en un proceso por asociación delictiva o criminal:</p> <p>a) Amenazare seriamente a otro con el objeto de que preste una declaración o un testimonio falso;</p> <p>b) Amenazare seriamente o constriñere violentamente a otro a que omita prestar</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se definen una serie de agravantes para la figura de asociación criminal o delictiva.</p> <p><i>Se eliminaría la palabra "económico" de la letra C) y D). El ejecutivo evaluará si corresponde dejarlo como un artículo independiente o como un agravante del anterior.</i></p> <p>PENDIENTE</p>

		<p>declaración o testimonio, a que produzca o presente antecedentes o pruebas falsas, o a que omita producir o presentar antecedentes o pruebas relevantes;</p> <p>c) Ofreciere o entregare un beneficio económico a otro para que preste una declaración o testimonio falso o para que omita declarar o testificar, u</p> <p>d) Ofreciere o entregare un beneficio económico a otro con el objeto de que produzca o presente antecedentes o pruebas falsas u omita producir o presentar antecedentes o pruebas relevantes.</p>	
<p>ART. 294. Cualesquiera otros individuos que hubieren tomado parte en la asociación y los que a sabiendas y voluntariamente le hubieren suministrado medios e instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán castigados, en el primer caso previsto por el artículo precedente, con presidio menor en su grado medio, y en el segundo, con presidio menor en su grado mínimo.</p>	<p>ART. 294. Las penas de los artículos 292 y 293 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades.</p> <p>Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá, además, como consecuencia accesorio de la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica.</p> <p>En todo caso se impondrá el comiso de ganancias. Por el comiso se priva al condenado de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del</p>	<p>ARTÍCULO 294. Las penas de los artículos 292 y 293 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades.</p> <p>Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá, además, como consecuencia accesorio de la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica.</p> <p>En todo caso se impondrá el comiso de ganancias, de conformidad con el artículo 24 bis del Código Penal. Asimismo, caerán en comiso todos los activos vinculados a la actividad en cuyo</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se adecuan las penas para el comiso por equivalencia y se incluye a las personas jurídicas.</p>

	<p>delito, o bien para perpetrarlo o por haberlo perpetrado, y se transfieren al fisco.</p> <p>Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.</p> <p>Asimismo, caerán en comiso todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere perpetrado el delito, a menos que se acredite su origen lícito.</p>	<p>contexto se hubiere perpetrado el delito, a menos que se acredite su origen lícito.</p> <p>El comiso de ganancias será impuesto en conformidad con los procedimientos establecidos por la ley.</p>	
<p>ART. 294 BIS. Las penas de los artículos 293 y 294 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades.</p> <p>Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesorio de la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica.</p>	<p>ART. 294 bis. Siempre que se establezca que proceden de un hecho ilícito, se transferirán al fisco todas las ganancias a que se refiere el artículo anterior, en los siguientes casos:</p> <p>1°. cuando se dictare sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal.</p> <p>2°. cuando se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código.</p>	<p>ARTÍCULO 294 BIS. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas por una organización delictiva o criminal, en los términos del artículo anterior, cuando:</p> <p>1°. Se dictare sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal;</p> <p>2°. Se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código;</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se regula el comiso de ganancias para las organizaciones delictivas y se incluye la figura del comiso sin condena.</p>

	<p>3°. cuando se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho.</p> <p>4°. cuando se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pusiére fin a esa responsabilidad.</p> <p>La transferencia al fisco de las ganancias que se establecen en este artículo no se reputarán pena en los términos señalados en el artículo 20.</p>	<p>3°. Se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho, o</p> <p>4°. Se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pusiére fin a esa responsabilidad.</p> <p>El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto también respecto de aquellas personas que no hubieren intervenido en la realización del hecho ilícito que se encontraren en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 24 ter del Código Penal.</p> <p>El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.</p> <p>La acción para obtener el comiso de ganancias en virtud de este artículo prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva.</p>	
--	--	--	--

		<p>ARTÍCULO 294 TER. Cuando la cosa usada como instrumento por una organización delictiva o criminal o que resulte de dichos delitos sea dinero o haya sido enajenada, perdida u ocultada, el juez deberá imponer comiso sustitutivo por un valor equivalente.</p> <p>El comiso por valor equivalente sólo procederá como consecuencia adicional a la pena. En la determinación del valor equivalente de la cosa a ser decomisada, no podrán descontarse los gastos que hayan sido necesarios para perpetrar el hecho. El valor equivalente se extenderá, asimismo, a los frutos o utilidades de los efectos del hecho.</p> <p>El Ministerio Público deberá solicitar la aplicación del comiso por valor equivalente en la oportunidad procesal prevista para solicitar el comiso de ganancias, y la discusión sobre el monto del valor equivalente tendrá lugar en la oportunidad procesal prevista para la determinación de la magnitud del comiso de ganancias.</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se genera y regula la figura del comiso por equivalencia</p>
<p>ART. 295. Quedarán exentos de las penas señaladas en los artículos anteriores aquellos de los culpables que, antes de ejecutarse alguno de los crímenes o simples delitos que constituyen el objeto de la asociación y antes de ser perseguidos, hubieren revelado a la</p>	<p>ART. 295. El tribunal prescindirá de las penas señaladas en los artículos 292 y 293 o impondrá la pena inferior en uno o dos grados al integrante que:</p> <p>2. Antes de tener lugar alguno de los hechos cuya perpetración constituyere el fin o la actividad</p>	<p>ARTÍCULO 295. El tribunal prescindirá de las penas señaladas en los artículos 292 y 293 o impondrá la pena inferior en uno o dos grados al integrante que:</p> <p>2) Antes de tener lugar alguno de los hechos cuya perpetración constituyere el fin o la actividad</p>	<p>A FAVOR</p> <p>Se define como atenuante de las penas para un miembro de una asociación criminal, quien ayude a las autoridades o denuncie el ilícito.</p>

<p>autoridad la existencia de dichas asociaciones, sus planes y propósitos.</p> <p>Podrán sin embargo ser puestos bajo la vigilancia de la autoridad.</p>	<p>de la asociación, revelare a la autoridad la existencia de la asociación, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros.</p> <p>2. Habiendo o no habiendo intervenido en la perpetración de los delitos que constituyeren el fin o la actividad de la asociación o que correspondieren a medios de los que ella se valiere, revelare a la autoridad la existencia de la asociación, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros de tal modo que, a juicio del tribunal, la autoridad hubiere estado en condiciones de disolverla antes de la perpetración de hechos ulteriores.”.</p>	<p>de la asociación, revelare a la autoridad la existencia de la asociación, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros;</p> <p>2) Habiendo o no habiendo intervenido en la perpetración de los delitos que constituyeren el fin o la actividad de la asociación o que correspondieren a medios de los que ella se valiere, revelare a la autoridad la existencia de la asociación, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros de tal modo que a juicio del tribunal la autoridad hubiere estado en condiciones de disolverla antes de la perpetración de hechos ulteriores.”.</p>	
<p>Título Séptimo Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual. § VII. Disposiciones comunes a los dos párrafos anteriores.</p> <p>ART. 369 ter.</p> <p>Cuando existieren sospechas fundadas de que una persona o una organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 366 quinquies, 367, 367 ter, 374</p>	<p>2. Modifícase el artículo 369 ter en el siguiente sentido:</p> <p>a) En el inciso primero:</p> <p>i. Elimínase la frase “o una organización delictiva”.</p>	<p><u>Número 2</u> (consultado por el Ejecutivo como número 11)</p> <p><u>Letra a)</u></p> <p><u>Ordinal ii</u></p> <p>4.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:</p>	

<p>bis, inciso primero, y 374 ter, y la investigación lo hiciere imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integren dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones. En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal.</p> <p>Igualmente, bajo los mismos supuestos previstos en el inciso precedente, podrá el tribunal, a petición del Ministerio Público, autorizar la intervención de agentes encubiertos. Mediando igual autorización y con el objeto exclusivo de facilitar la labor de estos agentes, los organismos policiales pertinentes podrán mantener un registro reservado de producciones del carácter investigado. Asimismo, podrán tener lugar entregas vigiladas de material respecto de la investigación de hechos que se instigaren o materializaren a través del</p>	<p>ii. Sustitúyese la frase “podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integren dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones.” por el siguiente texto: “podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona, la captación, grabación y registro subrepticio de imágenes o sonidos, y el registro remoto de equipos informáticos.”.</p>	<p>“ii. Sustitúyese la frase “o de quienes integren dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones”, por el siguiente texto: “. La captación, grabación y registro subrepticio de imágenes o sonidos en lugares cerrados o que sean de libre acceso al público, podrá ser autorizada por el juez, a solicitud del fiscal cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados y graves que lo hicieren imprescindible para el esclarecimiento de los hechos”.</p> <p>Letra nueva</p> <p>5.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar la siguiente letra b), nueva:</p> <p>“b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la oración “Igualmente, bajo los mismos supuestos previstos en el inciso precedente, podrá el tribunal, a petición del Ministerio Público, autorizar la intervención de agentes encubiertos.”, por la siguiente frase: “El Fiscal Regional podrá autorizar la intervención de agentes encubiertos en los términos establecidos en el artículo 226 B del Código Procesal Penal.”.</p>	<p><u>PREGUNTAR A FISCALÍA</u></p> <p>Se pretende regular o restringir la utilización de registros o grabaciones de asociaciones criminales, previa autorización del juez a petición del fiscal.</p> <p>¿La fiscalía queda conforme con esta nueva redacción?</p> <p><u>A FAVOR</u></p> <p>En el caso de los agentes encubiertos, si bien se elimina la autorización del juez y solo queda a la autorización del fiscal regional, se cambia la referencia a las disposiciones legales a las cuales se podrá realizar (de la ley N°20.000 de drogas al código procesal penal)</p> <p>PREGUNTAR OPINIÓN A LA FISCALÍA</p>
--	---	---	--

<p>intercambio de dichos elementos, en cualquier soporte.</p> <p>La actuación de los agentes encubiertos y las entregas vigiladas serán plenamente aplicables al caso en que la actuación de los agentes o el traslado o circulación de producciones se desarrolle a través de un sistema de telecomunicaciones.</p> <p>Los agentes encubiertos, el secreto de sus actuaciones, registros o documentos y las entregas vigiladas se regirán por las disposiciones de la ley N° 20.000.</p>		<p>oooo</p>	
<p>Título Octavo. Crímenes y simples delitos contra las personas. § V bis. De los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas</p> <p>Artículo 411 octies.- Previa autorización del juez de garantía competente, el fiscal podrá autorizar, en las investigaciones por los delitos previstos en el presente párrafo, que funcionarios policiales se desempeñen como agentes encubiertos y, a propuesta de dichos funcionarios, que determinados informantes de esos servicios actúen en esa calidad.</p>	<p>3. Modifícase el artículo 411 octies en el siguiente sentido:</p>	<p>Número 3 (consultado por el Ejecutivo como número 12)</p> <p>Letra nueva</p> <p>6.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para anteponer la siguiente letra a), nueva:</p> <p>“a) Sustitúyese el inciso primero, por el texto siguiente: “ARTÍCULO 411 octies. El Fiscal Regional para los delitos previstos en el presente Párrafo, podrá autorizar la intervención de agentes encubiertos e informantes en los términos establecidos en el artículo 226 B y artículo 226 E, según corresponda, ambos del Código Procesal Penal”.”.</p>	<p>A FAVOR</p> <p>En el caso de los agentes encubiertos, si bien se elimina la autorización del juez y solo queda a la autorización del fiscal regional, se cambia la referencia a las disposiciones legales a las cuales se podrá realizar (código procesal penal)</p> <p>PREGUNTAR OPINIÓN A LA FISCALÍA</p>

<p>Quando existieren sospechas fundadas de que una persona o una organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos indicados en este párrafo, y la investigación lo hiciere imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, <u>podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integren dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones.</u> En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal.</p> <p>Estas técnicas podrán ser utilizadas por el fiscal sea que se trate de una persona, un grupo de personas o una organización delictiva que hubiere cometido o preparado la comisión de los delitos señalados en este artículo.</p>	<p>a) En el inciso segundo:</p> <p>i. Elimínase la frase “o una organización delictiva”.</p> <p>ii. Sustitúyese la frase “podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integren dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones.” por el siguiente texto: “podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona, la captación, grabación y registro subrepticio de imágenes o sonidos, y el registro remoto de equipos informáticos.”.</p> <p>b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:</p> <p>“Igualmente, cuando la investigación lo hiciere imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la utilización de otra u otras de</p>	<p><u>Letra a)</u></p> <p>7.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirla por la siguiente, contemplada como letra b):</p> <p>“b) Sustitúyese el inciso segundo por el que sigue:</p> <p>“Cuando existieren fundadas sospechas de que una persona hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos indicados en este Párrafo y la investigación lo hiciere imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona. La captación, grabación y registro subrepticio de imágenes o sonidos en lugares cerrados o que sean de libre acceso al público, podrá ser autorizada por el juez, a solicitud del fiscal cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados y graves que lo hicieren imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal.”.”.</p>	<p><u>A FAVOR</u></p> <p>Se cambia la misma norma anterior, pero en otra parte de la ley. Es decir, es una adecuación de concordancia, si es que el Ministerio Público no presentó un reparo en el artículo anterior.</p>
--	--	--	--

<p>En todo aquello no regulado por este artículo los agentes encubiertos e informantes se regirán por las disposiciones respectivas de <u>la ley N° 20.000</u>.</p>	<p>las diligencias especiales de investigación reguladas en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II del Código Procesal Penal.”.</p> <p>c) Sustitúyese, en el inciso final, la expresión “de la ley N° 20.000” por “del Párrafo 3° bis del Título I del Libro II del Código Procesal Penal”.</p>		
<p>Título Noveno. Crímenes y simples delitos contra la propiedad. § IV bis. Del Abigeato</p> <p>ART. 448 quáter.</p> <p>Se castigará como autor de abigeato a aquel en cuyo poder se encuentren animales o partes de los mismos referidos en este Párrafo, cuando no pueda justificar su adquisición o legítima tenencia y, del mismo modo, al que sea habido en predio ajeno, arreando, transportando, manteniendo cautivas, inmovilizadas o maniatadas dichas especies animales. El porte de armas, herramientas o utensilios comúnmente empleados para el faenamiento de animales por quien no diere descargo suficiente de su tenencia, se castigará de conformidad a lo establecido en el artículo 445.</p> <p>Las marcas registradas, señales conocidas, dispositivos de identificación individual oficial registrados ante el</p>			

<p>Servicio Agrícola y Ganadero u otras de carácter electrónico o tecnológico puestas sobre el animal, constituyen presunción de dominio a favor del dueño de la marca o señal.</p> <p>Para los efectos previstos en el inciso primero, en los casos de traslado de animales o de partes de los mismos, realizado en vehículos de transporte de carga, Carabineros de Chile deberá exigir, además del formulario de movimiento animal, la boleta, factura o guía de despacho correspondiente, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales se incautarán de las especies, sus partes y del medio de transporte, dando aviso a la fiscalía correspondiente para el inicio de la investigación que proceda, al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario, a la autoridad sanitaria competente para que instruya sumario sanitario y al Servicio Agrícola y Ganadero para determinar la eventual existencia de infracciones a la normativa agropecuaria.</p> <p>Ante la sospecha o la comisión de los delitos a que se refiere este párrafo, el</p>	<p>4. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 448 quáter, el texto “bajo la técnica de entrega vigilada o controlada, en los términos regulados en el Título II, Párrafo 1°, de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.” por el siguiente: “bajo la técnica de entrega vigilada en los términos regulados en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II del Código Procesal Penal.”.</p>		
--	--	--	--

<p>Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones, el imputado que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.</p> <p>En los casos en que no sea aplicable lo dispuesto en el inciso anterior, estando pendiente el recurso contra la resolución que dispone la libertad, para impedir la posible fuga del imputado la Corte de Apelaciones respectiva tendrá la facultad de decretar una orden de no innovar, desde luego y sin esperar la vista del recurso de apelación del fiscal o del querellante.</p>			
<p>Título VI Medidas cautelares reales</p> <p>Artículo 157.- Procedencia de las medidas cautelares reales. Durante la</p>		<p>Números nuevos</p> <p>9.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para introducir los siguientes números 2, 3 y 4, nuevos,</p>	

<p>etapa de investigación, el ministerio público o la víctima podrán solicitar por escrito al juez de garantía que decrete respecto del imputado, una o más de las medidas precautorias autorizadas en el Título V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En estos casos, las solicitudes respectivas se substanciarán y regirán de acuerdo a lo previsto en el Título IV del mismo Libro. Con todo, concedida la medida, el plazo para presentar la demanda se extenderá hasta la oportunidad prevista en el artículo 60.</p> <p>Del mismo modo, al deducir la demanda civil, la víctima podrá solicitar que se decrete una o más de dichas medidas.</p>		<p>ajustándose la numeración correlativa de los números subsiguientes:</p> <p>“2. Incorpórase, en el artículo 157, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“El Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes con el fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito o, de proceder, el comiso por valor equivalente de instrumentos o efectos del delito. Para estos efectos, el juez podrá ordenar que se congelen las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros. No se requerirá que concurra la circunstancia segunda del artículo 279 del Código de Procedimiento Civil.”.</p>	
		<p>3. Incorpórase un artículo 157 bis, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“Artículo 157 bis.- Concesión de medidas sin audiencia del afectado. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias o de valor equivalente de</p>	

		<p>bienes o efectos podrán ser decretadas sin audiencia del afectado.</p> <p>Si se procediere de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a treinta días ni superior a ciento veinte días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización, o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”.</p>	
		<p>4. Incorpórase un artículo 218 bis, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“Artículo 218 bis.- Registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional. A petición del fiscal, el juez de garantía podrá autorizar la entrega de registros de tráfico de llamadas telefónicas, de envíos de correspondencia o de tráfico en internet a las empresas o agencias estatales correspondientes, cuando por motivos fundados ello fuere útil para la investigación.</p> <p>La orden deberá especificar el nombre y otros antecedentes necesarios para individualizar a los afectados por la medida. En caso de afectar a personas distintas del imputado, la solicitud deberá justificar la necesidad de contar con esos registros.</p>	

		<p>Los registros así obtenidos quedarán bajo custodia del Ministerio Público, quien cuidará que los datos en cuestión no sean conocidos por terceras personas.</p> <p>Los registros solo podrán ser utilizados para los efectos de la investigación, no pudiendo ser utilizados para otros fines y debiendo ser destruidos a su término.”.”.</p>	
<p>LIBRO II Título I Etapas de investigación Párrafo 3º Actuaciones de la investigación</p> <p>Artículo 219.- Copias de comunicaciones o transmisiones. El juez de garantía podrá autorizar, a petición del fiscal, que cualquier empresa de comunicaciones facilite copias de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ellas. Del mismo modo, podrá ordenar la entrega de las versiones que existieren de las transmisiones de radio, televisión u otros medios.</p>		<p>Número nuevo</p> <p>10.- De los Honorables Senadores señores Ossandón y Van Rysselberghe, para intercalar, a continuación del número 1, el siguiente número nuevo, consultado como número 2:</p> <p>“2. Reemplázase el artículo 219 por el siguiente:</p> <p>“Artículo 219.- Copias de comunicaciones, transmisiones y datos informáticos.</p> <p>El Ministerio Público podrá requerir a cualquier proveedor de servicios, previa autorización judicial, que entregue la información que tenga almacenada relativa al tráfico y el contenido de comunicaciones de sus abonados, referida al periodo de tiempo</p>	

		<p>determinado establecido por la señalada resolución judicial.</p> <p>Para efectos de este artículo se entenderá por datos relativos al tráfico, todos los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático o de telecomunicaciones, generados por este último en tanto elemento de la cadena de comunicación, y que indiquen el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente.</p> <p>El Ministerio Público podrá requerir, en el marco de una investigación penal en curso y sin autorización judicial, a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en territorio chileno, que facilite los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por éstos para facilitar la identificación de quienes corresponda en el marco de la referida investigación. Del mismo modo, podrá solicitar la entrega de las versiones que existieren de las transmisiones de radio, televisión u otros medios públicos. Los proveedores de servicios deberán mantener el secreto de esta solicitud. La forma, resguardos y condiciones y extensión del secreto de este requerimiento quedarán establecidas en</p>	
--	--	---	--

		<p>un instructivo elaborado para este efecto por el Fiscal Nacional.</p> <p>Por datos de suscriptor se entenderá aquella información que posea un proveedor de servicios, relacionada con sus abonados, excluidos los datos sobre tráfico y contenido, y que permita determinar su identidad, como es la información del nombre del titular del servicio, número de identificación, dirección geográfica, número de teléfono, correo electrónico, información sobre facturación y medio de pago.</p> <p>Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de internet deberán mantener, con carácter reservado y adoptando las medidas de seguridad correspondientes, a disposición del Ministerio Público a efectos de una investigación penal, por un plazo de un año, un listado y registro actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y de los números IP de las conexiones que realicen sus clientes o usuarios, con sus correspondientes datos relativos al tráfico, así como los domicilios o residencias de sus clientes o usuarios.</p> <p>Los funcionarios públicos, los intervinientes en la investigación penal y los empleados de las empresas mencionadas en este artículo que</p>	
--	--	---	--

		<p>intervengan en este tipo de requerimientos deberán guardar secreto acerca de los mismos, salvo que se les citare a declarar.</p> <p>La entrega de los antecedentes deberá realizarse en el plazo que disponga el fiscal en el caso de aquellos señalados en el inciso primero de este artículo o la resolución judicial, en el caso de los antecedentes a que se refiere el inciso tercero. Si el requerido estimare que no pudiere cumplir con el plazo, en atención al volumen y la naturaleza de la información solicitada o la información no exista o no la posea, deberá comunicar de dicha circunstancia fundadamente al fiscal o al tribunal, según correspondiere, dentro del término señalado en el requerimiento o en la resolución judicial respectiva.</p> <p>En caso de negativa o retardo injustificado de entrega de la información señalada en este artículo, el Ministerio Público podrá requerir al juez de garantía, su autorización previa, para el ingreso al domicilio, sin restricción de horario, de la institución u organización en que se encuentren los sistemas informáticos que contengan la información requerida y copiarla en formato seguro.</p> <p>Si, a pesar de las medidas señaladas en este artículo, la información no fuere</p>	
--	--	--	--

		<p>entregada, podrá ser requerida al representante legal de la institución u organización de que se trate, bajo apercibimiento de arresto.</p> <p>La infracción a la mantención del listado y registro actualizado, por un plazo de un año, de los antecedentes señalados en el inciso quinto será castigada según las sanciones y el procedimiento previsto en los artículos 36 y 36 A de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones. El incumplimiento de las obligaciones de mantener con carácter reservado y adoptar las medidas de seguridad correspondientes de los antecedentes señalados en el inciso quinto, será sancionando con la pena prevista en la letra f) del artículo 36 B de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.”.”.</p>	
<p>Artículo 221.- Inventario y custodia. De toda diligencia de incautación se levantará inventario, conforme a las reglas generales. El encargado de la diligencia otorgará al imputado o a la persona que los hubiere tenido en su poder un recibo detallado de los objetos y documentos incautados. Los objetos y documentos incautados serán inventariados y sellados y se pondrán bajo custodia del ministerio público en los términos del artículo 188.</p>			
	<p>2. Incorpórase, entre los artículos 221 y 222, un epígrafe nuevo del siguiente tenor:</p>		

	“I. Interceptación de comunicaciones”		
<p>Artículo 222.- Interceptación de comunicaciones telefónicas. Cuando existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación en un hecho punible que mereciere pena de crimen, y la investigación lo hiciere imprescindible, el juez de garantía, a petición del ministerio público, podrá ordenar la interceptación y grabación de sus comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación.</p> <p>La orden a que se refiere el inciso precedente sólo podrá afectar al imputado o a personas respecto de las cuales existieren <u>sospechas fundadas</u>, basadas en hechos determinados, de</p>	<p>3. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 222:</p> <p>a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:</p> <p>“Artículo 222.- Ámbito de aplicación. El juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación cuando existan <u>indicios suficientes</u> de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley le asigne <u>una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo</u>, y la investigación de tales delitos lo hiciere imprescindible.”.</p> <p>b) Reemplázase en su inciso segundo la frase “sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, de que ellas” por la siguiente “indicios suficientes de que”.</p>	<p><u>Número 3</u> (consultado por el Ejecutivo como número 6)</p> <p><u>Letra a)</u></p> <p><u>Inciso primero propuesto</u></p> <p>11.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para modificarlo en el siguiente sentido:</p> <p>a) Sustituir la expresión “indicios suficientes” por “fundadas sospechas basadas en hechos determinados”.</p> <p>b) Sustituir la frase “una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo”, por la expresión “pena de crimen”.</p> <p><u>Letra b)</u></p> <p>12.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:</p> <p>“b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:</p> <p>i. Sustitúyese la expresión “sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, de que ellas”, por la frase</p>	

<p><u>que ellas</u> sirven de intermediarias de dichas comunicaciones y, asimismo, de aquellas que facilitaren sus medios de comunicación <u>al imputado o sus intermediarios.</u></p> <p>No se podrán interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado, a menos que el juez de garantía lo ordenare, por estimar fundadamente, sobre la base de <u>antecedentes</u> de los que dejará constancia en la respectiva resolución, que el abogado pudiere tener responsabilidad penal en los hechos investigados.</p> <p>La orden que dispusiere la interceptación y grabación deberá indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida y</p>	<p>c) Reemplázase su inciso cuarto por el siguiente:</p> <p>“La orden que disponga la interceptación y grabación deberá consignar las circunstancias necesarias para individualizar o determinar al afectado</p>	<p>“fundadas sospechas basadas en hechos determinados, de que”.</p> <p>ii. Intercálase, entre la expresión “al imputado o sus intermediarios” y el punto y aparte que le sigue, la frase “y la investigación de tales delitos lo hiciere imprescindible”.”.</p> <p>Letra nueva</p> <p>13.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar una letra c), nueva, del siguiente tenor:</p> <p>“c) Sustitúyese, en su inciso tercero, la expresión “antecedentes” por “hechos determinados”.”.</p> <p>ooooo</p>	
--	--	---	--

<p>señalar la forma de la interceptación y la duración de la misma, que no podrá exceder de sesenta días. El juez podrá prorrogar este plazo por períodos de hasta igual duración, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en los incisos precedentes.</p> <p>Las empresas <u>telefónicas y de comunicaciones</u> deberán dar cumplimiento a esta medida, proporcionando a los funcionarios encargados de la diligencia las facilidades necesarias para que se lleve a cabo con la oportunidad con que se</p>	<p>por la medida y, de ser posible, los datos que permitan singularizar los medios de comunicación o telecomunicación a intervenir y grabar, tales como números de líneas telefónicas, direcciones IP, casillas de correos, entre otros. También señalará la autoridad o funcionario policial que se encargará de la diligencia de interceptación y grabación, la forma de la interceptación, su alcance y su duración.”.</p> <p>d) Incorpórase un inciso quinto nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto y así sucesivamente, del siguiente tenor:</p> <p>“La interceptación no podrá exceder de sesenta días. El juez podrá prorrogar este plazo por períodos de hasta igual duración, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en los incisos precedentes.”.</p> <p>e) Introdúcense las siguientes modificaciones al actual inciso quinto, que ha pasado a ser sexto:</p> <p>i. Reemplázase la expresión “telefónicas y de comunicaciones” por la frase “concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y prestadores de servicios de internet”.</p>		
---	--	--	--

<p>requiera. Con este objetivo los proveedores de tales servicios deberán mantener, <u>en carácter reservado</u>, a disposición del Ministerio Público, un listado actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y un registro, no inferior a un año, de los números IP de las conexiones que realicen <u>sus abonados</u>. La negativa o entorpecimiento a la práctica de la medida de interceptación y grabación será constitutiva del delito de desacato. Asimismo, los encargados de realizar la diligencia y los empleados de las empresas mencionadas en este inciso deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento.</p> <p>Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disiparen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.</p>	<p>ii. Agrégase, a continuación de la expresión “en carácter reservado”, la frase “y bajo las medidas de seguridad correspondientes”.</p> <p>iii Intercálase, entre las expresiones “sus abonados.” y “La negativa”, la siguiente oración: “Transcurrido el plazo máximo de mantención de los datos señalados precedentemente, las empresas y prestadores de servicios deberán destruir en forma segura dicha información.”.</p>		
<p>Artículo 223.- Registro de la interceptación. La interceptación telefónica de que trata el artículo precedente será registrada mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la fidelidad del registro. La grabación será</p>	<p>4. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 223:</p> <p>a) Suprímese en su inciso primero el vocablo “telefónica”.</p>	<p><u>Número 4</u> (consultado por el Ejecutivo como número 7)</p> <p><u>Letra a)</u></p> <p>14.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarla.</p>	

<p>entregada directamente al ministerio público, quien la conservará bajo sello y cuidará que la misma no sea conocida por terceras personas.</p> <p>Cuando lo estimare conveniente, el ministerio público podrá disponer la transcripción escrita de la grabación, por un funcionario que actuará, en tal caso, como ministro de fe acerca de la fidelidad de aquélla. Sin perjuicio de ello, el ministerio público deberá conservar los originales de la grabación, en la forma prevista en el inciso precedente.</p> <p>La incorporación al juicio oral de los resultados obtenidos de la medida de interceptación se realizará de la manera que determinare el tribunal, en la oportunidad procesal respectiva. En todo caso, podrán ser citados como testigos los encargados de practicar la diligencia.</p> <p>Aquellas comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento serán entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se destruirá toda transcripción o copia de ellas por el ministerio público.</p> <p>Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellas grabaciones que contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos que pudieren constituir un delito que merezca pena de</p>	<p>b) Sustitúyense sus incisos cuarto y quinto por los siguientes:</p> <p>“Las comunicaciones que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate serán entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida. El Ministerio Público destruirá toda transcripción o copia de ellas.</p> <p>Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellas grabaciones que contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos que pudieren constituir un delito al que la ley le asigne <u>una pena igual o superior a presidio</u></p>	<p><u>Letra b)</u></p> <p><u>Inciso quinto propuesto</u></p> <p>15.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo”, por la expresión “pena de crimen”.</p>	
---	---	--	--

crimen, de las cuales se podrá hacer uso conforme a las normas precedentes.	<u>menor en su grado máximo</u> , de las cuales se podrá hacer uso conforme a las normas precedentes.”.		
Artículo 225.- Prohibición de utilización. Los resultados de la medida de interceptación telefónica o de otras formas de telecomunicaciones no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento, cuando ella hubiere tenido lugar fuera de los supuestos previstos por la ley o cuando no se hubieren cumplido los requisitos previstos en el artículo 222 para la procedencia de la misma.			
		<p>Número nuevo</p> <p>16.- De los Honorables Senadores señores Ossandón y Van Rysselberghe, para incorporar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:</p> <p>“.... Incorpórase, entre los artículos 225 y 226, el siguiente epígrafe, junto con los artículos 225 bis, 225 ter, 225 quáter y 225 quinquies:</p> <p>“II. Registro remoto de equipos informáticos</p> <p>Artículo 225 bis.- Ámbito de aplicación. A petición fundada del Ministerio Público, el juez de garantía podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software que permita, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin</p>	

		<p>conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos, cuando existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley le asigne una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo.</p> <p>La medida será autorizada por un plazo máximo de 30 días. El juez de garantía podrá prorrogar este plazo por períodos de hasta igual duración, con un máximo de 90 días, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en el inciso anterior.</p>	
		<p>Artículo 225 ter.- Requisitos de la resolución que autoriza la medida. La resolución judicial que autorice el registro remoto deberá especificar:</p> <p>a) Los computadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos o parte de estos, medios informáticos de almacenamiento de datos o bases de datos, datos u otros contenidos digitales objeto de la medida;</p>	

		<p>b) El alcance de la medida, la forma en la que se procederá al acceso y aprehensión de los datos o archivos informáticos relevantes para la causa y el software mediante el que se ejecutará el control de la información;</p> <p>c) Los agentes autorizados para la ejecución de la medida;</p> <p>d) La autorización, en su caso, para la realización y conservación de copias de los datos informáticos;</p> <p>e) Las medidas precisas para preservar la integridad de los datos almacenados, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del sistema informático objeto de la medida; y</p> <p>f) La duración precisa de la medida.</p>	
		<p>Artículo 225 quáter.- Ampliación del registro. Cuando al ejecutarse el registro remoto resulten motivos para creer que los datos buscados estén almacenados en otro sistema informático o en una parte del mismo, el juez de garantía, a petición fundada del Ministerio Público, podrá autorizar la ampliación de los términos del registro.</p> <p>La resolución judicial que autorice la ampliación del registro deberá especificar los antecedentes señalados en el artículo anterior, que resulten</p>	

		pertinentes para el desarrollo de la ampliación.	
		<p>Artículo 225 quinquies. Deber de colaboración. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información y los titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto de registro, están obligados a colaborar con los funcionarios policiales encargados de ejecutar la medida, facilitando su práctica y acceso al sistema. Asimismo, están obligados a facilitar la asistencia necesaria para que los datos y las informaciones recogidas puedan ser objeto de examen y visualización.</p> <p>Los sujetos requeridos para prestar la colaboración tendrán la obligación de guardar secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.”.”.</p>	
	5. Incorpórase, entre los artículos 225 y 226, el siguiente epígrafe, nuevo:		
	<p>“II. Otros medios técnicos de investigación”.</p>		
	6. Sustitúyese el artículo 226 por el siguiente:	<p>Número 6 (consultado por el Ejecutivo como número 9)</p> <p><u>Artículo 226 propuesto</u></p>	

<p>Artículo 226.- Otros medios técnicos de investigación. Cuando el procedimiento tuviere por objeto la investigación de un hecho punible que mereciere pena de crimen, el juez de garantía podrá ordenar, a petición del ministerio público, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, podrá disponer la grabación de comunicaciones entre personas presentes. Regirán correspondientemente las normas contenidas en los artículos 222 al 225.</p>	<p>“Artículo 226.- Otros medios técnicos de investigación. Cuando el procedimiento tuviere por objeto la investigación de un hecho punible al que la ley le asigne <u>una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo</u>, el juez de garantía podrá ordenar, a petición del Ministerio Público, el empleo de medios tecnológicos para captar, grabar y registrar subrepticamente imágenes o sonidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al público, cuando <u>ello fuere conducente al</u> esclarecimiento de los hechos. Regirán, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 222 a 225.”.</p>	<p>17.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para modificarlo en el siguiente sentido:</p> <p>a) Sustituir la frase “una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo”, por la expresión “pena de crimen”.</p> <p>b) Sustituir la expresión “ello fuere conducente al” por “existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados y graves que lo hicieren imprescindible para el”.</p>	
	<p>7. Intercálase, a continuación del artículo 226 y antes del artículo 226 bis, el siguiente Párrafo 3° bis, nuevo:</p> <p>“Párrafo 3° bis Diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada.”.</p>		
	<p>8. Incorpórase, a continuación del nuevo Párrafo 3° bis, el siguiente epígrafe, nuevo:</p> <p>“I. Medidas intrusivas referidas a las comunicaciones, imágenes y sonidos, y al registro de equipos informáticos”.</p>		
		<p>Número 9 (consultado por el Ejecutivo como número 12)</p>	

<p>Artículo 226 bis.- Técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en el artículo 190 de la ley N°18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal, lo hicieren imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando ésta o aquella no configure una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226, conforme lo disponen dichas normas.</p> <p>Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso</p>	<p>9. Sustitúyese el artículo 226 bis por el siguiente:</p> <p>“Artículo 226 bis.- Ámbito de aplicación. Las medidas de retención e incautación de correspondencia, obtención de copias de comunicaciones o transmisiones, de interceptación y grabación de comunicaciones, de conversaciones o imágenes obtenidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al público, y la de registro de equipos informáticos, serán aplicables a la investigación cuando existieren indicios suficientes, basados en hechos determinados, de la intervención en una asociación delictiva o criminal.</p> <p>Asimismo, serán aplicables cuando existieren indicios suficientes, basados en hechos determinados, de la intervención en una agrupación u</p>	<p>18.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente, consultado como número 12:</p> <p>“12. Sustitúyese el artículo 226 bis por el siguiente:</p> <p>“Artículo 226 A.- Ámbito de aplicación. Las técnicas especiales de investigación previstas en este párrafo serán aplicables en la investigación de hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, de acuerdo a lo previsto en los artículos siguientes.</p> <p>Las medidas de retención e incautación de correspondencia y de obtención de copias de comunicaciones o transmisiones serán aplicables a la investigación según lo establecido en el artículo 218.</p> <p>Las medidas de interceptación y grabación de comunicaciones, de conversaciones o imágenes obtenidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al público, serán aplicables, previa autorización judicial, cuando existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la intervención en una asociación delictiva o criminal y su uso fuere imprescindible para el éxito de la investigación.</p>	
---	--	--	--

<p>anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, inciso primero del 436 y 440 del Código Penal y de los delitos a que hace referencia el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada por los artículos 23 y 25 de la ley N°20.000, siempre que fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos.</p> <p>Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía.</p>	<p>organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer los delitos contenidos en la ley N° 12.927, en la ley N° 17.798, en la ley N° 18.314 y en los artículos 366 quinquies, 367, 367 ter, 374 bis, inciso primero, 411 bis, 411 ter y 411 quáter del Código Penal.</p> <p>La aplicación de las medidas intrusivas indicadas en el inciso anterior se regirán por las reglas generales, excepto lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 222, en cuanto a indicar el nombre y dirección del afectado por la medida, para lo cual será suficiente consignar la información circunstanciada que permita su individualización o determinación.”.</p>		
	<p>10. Incorpórase, a continuación del nuevo artículo 226 bis, el siguiente epígrafe, nuevo:</p> <p>“II. Agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes”.</p>		
		<p><u>Número 11</u></p> <p>19.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente, consultado como número 14:</p>	

	<p>11. Incorpórase, a continuación del nuevo epígrafe II, el siguiente artículo 226 ter:</p> <p>“Artículo 226 ter.- Ámbito de aplicación. Cuando existan indicios suficientes, basados en hechos determinados, de la intervención en una asociación delictiva o criminal, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, y mediante resolución fundada, podrá autorizar a funcionarios policiales determinados para que se desempeñen como agentes encubiertos o agentes reveladores, según corresponda, siempre que fuere indispensable para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad e intervención de sus responsables, conocer los planes de la asociación y prevenir la comisión de sus delitos o comprobar los que hubieren cometido.</p> <p>Asimismo, cumpliéndose los requisitos del inciso anterior, estas técnicas especiales de investigación podrán ser autorizadas cuando existan indicios suficientes, basados en hechos determinados, de la intervención en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer el delito de lavado de activos contenido en la ley N° 19.913, los delitos contenidos en la ley N° 12.927, en la ley N° 17.798, en la ley N° 18.314 y los</p>	<p>“14. Incorpórase, a continuación del nuevo epígrafe II, el siguiente artículo 226 B:”.</p> <p>“Artículo 226 B.- Ámbito de aplicación. El Fiscal Regional competente podrá autorizar a funcionarios policiales determinados para que se desempeñen como agentes encubiertos o agentes reveladores, cuando sea necesario para lograr el esclarecimiento de hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal, establecer la identidad e intervención de sus responsables, conocer los planes de la asociación, y prevenir la comisión de sus delitos o comprobar los que hubieren cometido.</p> <p>Al autorizar las medidas, el Fiscal Regional deberá asegurarse que ella se limite a las acciones estrictamente necesarias para los objetivos de la investigación, que los agentes reveladores o infiltrados no induzcan a la perpetración de delitos, y que la seguridad de los agentes reveladores o infiltrados se encuentre debidamente resguardada.</p> <p>El acto que autorice la medida será mantenido en poder del Ministerio Público en dos registros distintos. Con todo, la información relativa a la</p>	
--	---	---	--

	<p>delitos contemplados en los artículos 366 quinquies, 367, 367 ter, 374 bis, inciso primero, 411 bis, 411 ter y 411 quáter del Código Penal.</p> <p>Cumplíndose las mismas circunstancias indicadas en los incisos anteriores, el Ministerio Público podrá autorizar a cualquier persona para que se desempeñe como informante, siempre que fuere indispensable para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y participación de sus responsables, conocer los planes de la asociación, agrupación u organización y prevenir la perpetración de sus delitos o comprobar los que hubieren perpetrado.”.</p>	<p>verdadera identidad del agente se mantendrá únicamente en un registro.</p> <p>La autorización deberá consignar, además, la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto, si la tuviere. Asimismo, el acto que autorice deberá:</p> <p>a.- Circunscribir el ámbito de actuación de dichos agentes en conformidad con los antecedentes y el delito o los delitos invocados en la solicitud correspondiente;</p> <p>b.- Expresar la duración de la autorización, la que no podrá exceder de sesenta días, siendo prorrogable por períodos iguales, debiendo cumplirse los mismos requisitos establecidos para su otorgamiento y,</p> <p>c.- Establecer las medidas que deben adoptar para asegurar los objetivos establecidos en el inciso anterior, incluyendo aquellas previstas en el inciso cuarto del artículo 226 C.</p> <p>Cumplíndose las mismas circunstancias indicadas en el inciso primero, el Fiscal Regional podrá autorizar a cualquier persona para que se desempeñe como informante.</p> <p>Las autorizaciones establecidas en este artículo serán estrictamente</p>	
--	--	--	--

		<p>confidenciales y solo podrán ser conocidas por terceros en los casos señalados en la ley.</p> <p>Cuando la ley autorice el conocimiento por parte de terceros, el Ministerio Público pondrá a su disposición el registro que no consigna la información verdadera sobre la identidad de los agentes e informantes. El acceso al registro completo deberá ser autorizado por el juez de garantía competente con audiencia del Ministerio Público y se otorgará la autorización únicamente si fuere estrictamente necesario, si no pusiere en peligro la seguridad personal del agente o informante y si existieren todas las medidas necesarias para que la información no llegue a terceros. Teniendo en consideraron los antecedentes concretos, el juez podrá autorizar el acceso al registro total o parcialmente.”.”.</p>	
	<p>12. Incorpórase el siguiente artículo 226 <u>quáter</u>:</p>	<p><u>Número 12</u> (consultado por el Ejecutivo como número 15)</p> <p><u>Encabezamiento</u></p> <p>20.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “quáter” por la letra “C.</p> <p><u>Artículo 226 quáter propuesto</u></p>	

	<p>Artículo 226 <u>quáter</u>.- Agente encubierto. Agente encubierto es el funcionario policial que oculta su identidad oficial y se involucra o introduce en las asociaciones delictivas o criminales o agrupaciones u organizaciones a que se refiere el artículo anterior, con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación.</p> <p>El agente encubierto podrá tener una identidad e historia ficticias. La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá otorgar los medios necesarios para la oportuna y debida materialización de aquellas. Los funcionarios policiales que hubiesen actuado en una investigación con identidad falsa podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial fundada.</p>	<p><u>Inciso primero</u></p> <p>21.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir, en la denominación del artículo, la expresión “quáter” por la letra “C.</p> <p>ooooo</p> <p>Incisos nuevos</p> <p>22.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para introducir los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:</p> <p>“El Fiscal Regional podrá autorizar asimismo la apertura de una cuenta bancaria, la obtención de otras piezas de identidad relevantes tales como una licencia de conducir y la contratación de</p>	
--	---	---	--

	<p>La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien solicitó la autorización de la medida.</p> <p>La resolución judicial que autorice la medida deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto, si la tuviere. Asimismo, la resolución deberá circunscribir el ámbito de actuación de dichos agentes en conformidad a los antecedentes y al delito o los delitos invocados en la solicitud correspondiente. La resolución</p>	<p>servicios básicos haciendo uso de la identidad ficticia. El uso de esta facultad se orientará exclusivamente a reforzar la credibilidad de la identidad e historia ficticias. Un reglamento expedido en conjunto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá establecer los procedimientos y condiciones de ejercicio de esta facultad.</p> <p>Sin perjuicio de las penas aplicables por la perpetración de otros delitos, el uso manifiestamente indebido de las facultades asociadas a la historia ficticia será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”.</p> <p>o o o o o</p> <p>Inciso cuarto</p> <p>23.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo.</p>	
--	--	--	--

	también deberá expresar la duración de la autorización, que no podrá exceder de sesenta días, pudiendo prorrogarse por períodos de hasta igual duración, para lo cual el juez de garantía deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos que hacen procedente esta medida. Dicha resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.”.		
	<p>13. Agrégase el siguiente artículo 226 <u>quinquies</u>:</p> <p>“Artículo 226 <u>quinquies</u>.- Agente revelador. Agente revelador es el funcionario policial que simula requerir de otro la ejecución de una conducta delictiva con el objetivo de lograr la concreción de los propósitos delictivos de éste.</p> <p>El agente revelador podrá tener una identidad e historia ficticias. La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá otorgar los medios</p>	<p><u>Número 13</u> (consultado por el Ejecutivo como número 16)</p> <p><u>Encabezamiento</u></p> <p>24.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la voz “quinquies” por la expresión “D”.</p> <p><u>Artículo 226 quinquies propuesto</u></p> <p>Inciso primero</p> <p>25.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir, en la denominación del artículo, la voz “quinquies” por la expresión “D”.</p>	

	<p>necesarios para la oportuna y debida materialización de aquellas. Los funcionarios policiales que hubiesen actuado en una investigación con identidad falsa podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial fundada.</p> <p>La información que vaya obteniendo el agente revelador deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien solicitó la autorización de la medida.</p> <p>La resolución judicial que autorice la medida deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto, si la tuviere. Asimismo, la resolución deberá circunscribir el ámbito de actuación de dichos agentes en conformidad a los antecedentes y el delito o los delitos invocados en la solicitud correspondiente. La resolución también deberá expresar la duración de la autorización, que no podrá exceder de sesenta días, pudiendo prorrogarse por períodos de hasta igual duración, para lo cual el juez de garantía deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos que hacen procedente esta medida. Dicha</p>	<p>Inciso final</p> <p>26.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.</p>	
--	---	--	--

	resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.”.		
	<p>14. Incorpórase el siguiente artículo 226 <u>sexies</u>:</p> <p>“Artículo 226 sexies.- Informantes. Informante es quien suministra antecedentes a los organismos policiales acerca de la preparación o comisión de un delito o de quienes han participado en él.”.</p>	<p><u>Número 14</u> (consultado por el Ejecutivo como número 17)</p> <p><u>Encabezamiento</u></p> <p>27.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la voz “sexies” por la letra “E”.</p> <p><u>Artículo 226 sexies propuesto</u></p> <p>28.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:</p> <p>“Artículo 226 E.- Informantes. Informante es quien suministra antecedentes sustanciales a los organismos policiales acerca de la preparación o de la comisión de un delito de asociación delictiva o criminal y requiere de protección.</p> <p>La autorización que conceda la calidad de informante deberá ser otorgada por el Fiscal Regional.</p> <p>Contando con autorización del Fiscal Regional, el Ministerio Público también podrá disponer que sea tratado como informante quien participe, con su conocimiento y bajo su control, de una</p>	

		operación encubierta o de una entrega vigilada.”.	
	<p>15. Añádese el siguiente artículo 226 septies:</p> <p>“Artículo 226 septies.- Exención de responsabilidad criminal. El agente encubierto y el agente revelador estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con su finalidad.”.</p>	<p><u>Número 15</u></p> <p>29.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo, ajustándose la numeración correlativa de los números siguientes.</p>	
	<p>16. Incorpórase, a continuación del nuevo artículo 226 <u>septies</u>, el siguiente epígrafe:</p> <p>“III. Entregas vigiladas”</p>	<p><u>Número 16</u> (consultado por el Ejecutivo como número 18)</p> <p><u>Encabezamiento</u></p> <p>30.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “septies” por la letra “E”.</p>	
	<p>17. Agrégase el siguiente artículo 226 octies:</p>	<p><u>Número 17</u></p> <p>31.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente, consultado como número 19:</p> <p>“19. Incorpórase el siguiente artículo 226 F, nuevo:</p>	

	<p>“Artículo 226 octies.- Ámbito de aplicación. El juez de garantía, a petición del Ministerio Público, y mediante resolución fundada, podrá autorizar la entrega vigilada de objetos cuya fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia esté prohibida o restringida; los instrumentos que hubieren servido para la comisión de los delitos de que se trate, y los efectos de tales delitos, cuando existan sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, de la participación en una asociación delictiva o criminal o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer uno o más de los hechos indicados, y siempre que fuere indispensable para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y participación de sus responsables, conocer los planes de la asociación, agrupación u organización y prevenir la comisión de sus delitos o comprobar los que hubieren cometido.</p> <p>Se entenderá por entrega vigilada la técnica consistente en permitir que los objetos a los que se refiere el inciso anterior se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él, sin la interferencia de las policías o del Ministerio Público, pero bajo su conocimiento y vigilancia o control.</p>	<p>“Artículo 226 F.- Ámbito de aplicación. El Fiscal Regional podrá autorizar la entrega vigilada de objetos cuya fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión, o tenencia esté prohibida o restringida, de los instrumentos que hubieran servido para la comisión de los delitos de que se trate, y de los efectos y ganancias de tales delitos, siempre que ello resulte útil para la investigación de la participación en una asociación delictiva o criminal, o para establecer la identidad e intervención de intervinientes distintos de quienes se encuentran en posesión de los bienes en cuestión.</p> <p>Se entenderá por entrega vigilada la técnica consistente en permitir que los objetos a los que se refiere el inciso anterior se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él, sin la interferencia de las policías o del Ministerio Público, pero bajo su conocimiento y vigilancia o control.</p>	
--	--	--	--

		<p>Al autorizar la medida, el Fiscal Regional deberá asegurarse que ella se limite a las acciones estrictamente necesarias para los objetivos de la investigación, que los agentes estatales no induzcan a la perpetración de delitos, que el procedimiento no ponga en riesgo la integridad personal de terceros, y que los bienes cuya entrega vigilada se autoriza puedan ser, en definitiva, sujetos a comiso.</p>	
	<p>La resolución que autorice la medida deberá determinar explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de la entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de las especies de que se trate. Además, deberá expresar la duración de la autorización, la que no podrá exceder de sesenta días, pudiendo prorrogarse por períodos de hasta igual duración, para lo cual el juez de garantía deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos que hacen procedente esta medida.</p> <p>El Ministerio Público deberá adoptar todas las medidas necesarias para vigilar las especies y bienes mencionados en el inciso primero y para proteger a todos quienes participen en la operación.</p> <p>Cuando los objetos se encuentren en zonas sujetas a la potestad aduanera, el Servicio Nacional de Aduanas observará</p>	<p>La resolución que autorice la medida deberá:</p> <p>a.- Delimitar el objeto de la entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de las especies de que se trate;</p> <p>b.- Expresar la duración de la autorización, la que no podrá exceder de sesenta días, siendo prorrogable por períodos iguales, y</p> <p>c.- Establecer las medidas que deben ser tomadas para asegurar los objetivos establecidos en el inciso anterior.</p> <p>Cuando los objetos se encuentren en zonas sujetas a la potestad aduanera, el Servicio Nacional de Aduanas observará</p>	

	<p>las instrucciones que imparta el Ministerio Público para los efectos de aplicar esta técnica de investigación.</p> <p>Cuando la entrega vigilada o controlada deba practicarse total o parcialmente en territorio extranjero, ella se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, si los hubiere.”.</p>	<p>las instrucciones que imparta el Ministerio Público para los efectos de aplicar esta técnica de investigación.</p> <p>Cuando la entrega vigilada o controlada deba practicarse total o parcialmente en territorio extranjero, ella se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, si los hubiere.”.</p>	
	<p>18. Incorpórase el siguiente artículo 226 nonies:</p> <p>“Artículo 226 nonies.- Suspensión de la entrega vigilada. Si las diligencias pusieren en peligro la vida o integridad física de los funcionarios policiales o agentes encubiertos o reveladores que intervengan en la operación, la recolección de antecedentes relevantes para la investigación o el aseguramiento de los partícipes, el Ministerio Público podrá disponer la suspensión de la entrega vigilada y solicitar al juez de garantía que autorice la detención de los partícipes y la incautación de los instrumentos, objetos o efectos del delito.”.</p>	<p><u>Número 18</u></p> <p>32.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo, ajustándose la numeración correlativa de los números siguientes.</p>	
		<p><u>Número 19</u></p> <p>(consultado por el Ejecutivo como número 20)</p>	

	<p>19. Incorpórase a continuación del artículo 226 <u>nonies</u> el siguiente epígrafe, nuevo:</p> <p>“IV. Disposiciones comunes”.</p>	<p><u>Encabezamiento</u></p> <p>33.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “nonies” por la letra “F”.</p>	
	<p>20. Incorpórase el siguiente artículo 226 decies:</p> <p>“Artículo 226 decies.- Extralimitación en el desempeño de las diligencias especiales de investigación. Las resoluciones judiciales que autoricen la realización de alguna de las técnicas especiales de investigación referidas en los artículos 226 quáter, 226 quinquies y 226 octies deberán contener claramente el objeto y los límites impuestos para la realización de la diligencia en cuestión. De lo contrario, serán consideradas nulas. Los funcionarios policiales, agentes encubiertos y reveladores que ejecuten las medidas o actuaciones a que se refieren los artículos 226 quáter, 226 quinquies y 226 octies sin observar el objeto o límites impuestos por la resolución judicial respectiva, serán</p>	<p><u>Número 20</u></p> <p>34.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente, consultado como número 21:</p> <p>“21. Agréganse los siguientes artículos 226 G, 226 H, 226 I, 226 J, 226 K y 226 L, nuevos:</p> <p>“Artículo 226 G.- Exención de responsabilidad criminal. El agente encubierto, el agente revelador, así como los funcionarios que participen en una entrega vigilada u otra medida dispuesta de conformidad a este párrafo, estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir en cumplimiento de la resolución autoriza la medida.</p>	

	<p>sancionados con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, además de las penas que corresponda por los delitos cometidos. Igual pena se impondrá al fiscal y otros funcionarios del Ministerio Público o funcionarios policiales que, habiendo tenido conocimiento de los delitos cometidos por aquéllos, no los hubiere denunciado de inmediato o en un tiempo próximo, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan.</p> <p>El fiscal deberá consignar, individualizar y describir en la carpeta investigativa las conductas extralimitadas que no hubiesen sido denunciadas en atención a considerar procedente la exención de responsabilidad prevista en el artículo 226 septies. Del mismo modo, se expresarán las razones por las que se entiende que dichas conductas son consecuencia necesaria de la investigación y que son debidamente proporcionales con su finalidad.</p> <p>El juez de garantía deberá controlar el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes en las audiencias de control de detención o en la audiencia de preparación de juicio oral.</p>		
		<p>Artículo 226 H.- Prohibición de la inducción a la perpetración de delitos. El agente encubierto, el agente revelador y los funcionarios que participen en una</p>	

		<p>entrega vigilada o en otra medida dispuesta de conformidad a este párrafo, no podrán inducir a la perpetración de delitos que, de otro modo, no habrían sido cometidos por éste.</p> <p>Está exento de responsabilidad penal quien haya sido inducido, mediante actos coercitivos o fraudulentos, a la perpetración de un delito por agentes estatales.</p>	
		<p>Artículo 226 I.- Secreto y acceso a la información de defensa. El Ministerio Público podrá disponer el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos respecto de uno o más intervinientes, cuando estimare que existe riesgo para el éxito de la investigación o para la seguridad de los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, peritos y, en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento.</p> <p>Se aplicará lo dispuesto en el artículo 182, pero el Ministerio Público podrá disponer que se mantenga el secreto hasta el cierre de la investigación. Además, deberá adoptar medidas para garantizar que el término del secreto no ponga en riesgo la seguridad de las personas mencionadas en el inciso anterior.</p>	

		<p>Tras el cierre de la investigación, el juez de garantía deberá procurar el acceso de la defensa de todos los medios de prueba pertinentes, solo restringiendo en aquellos casos establecidos en el artículo 226 B inciso final.</p> <p>El que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.</p>	
		<p>Artículo 226 J.- Extralimitación en el uso de técnicas especiales. Los funcionarios policiales, agentes encubiertos y reveladores que ejecuten las medidas o actuaciones a que se refieren los artículos 226 B, 226 D y 226 F no observando el objeto o límites impuestos por la autorización respectiva, serán sancionados, además de las penas que corresponda por los delitos cometidos, con la pena de suspensión del empleo en su grado máximo y multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.</p> <p>La misma pena se aplicará al fiscal que, al autorizar la práctica de técnicas especiales, impartiera órdenes manifiestamente ilícitas.</p> <p>El juez de garantía declarará nulas las actuaciones que excedieren manifiestamente el objeto de las técnicas</p>	

		<p>especiales y las excluirá, de conformidad con el artículo 276.</p> <p>El agente policial o fiscal del Ministerio Público que perpetrare el delito del artículo 269 ter del Código Penal con ocasión del uso de las técnicas especiales de referidas en el inciso primero, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo e inhabilitación especial perpetua para el cargo.</p>	
		<p>Artículo 226 K.- Utilización de medios de prueba. Los antecedentes o evidencia obtenidos mediante la aplicación de las facultades previstas en este Párrafo y que resultaren irrelevantes para el procedimiento serán entregados o devueltos en su oportunidad a las personas afectadas y se destruirá todo registro, transcripción o copia de ellos por el Ministerio Público.</p> <p>Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellos antecedentes o evidencia que pudieren ser útiles o relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos en cuya investigación fueren también aplicables las disposiciones de este Párrafo.</p>	
		<p>Artículo 226 L.- Rendición de cuentas. La Fiscalía Nacional deberá informar anualmente sobre el número de medidas</p>	

		especiales utilizadas de conformidad con el presente párrafo, con la ley N° 20.000 y con la ley N° 19.913 y sobre sus efectos. El Fiscal Nacional deberá dar cuenta por medio de un informe que deberá remitir a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.”.”.	
	<p>21. Incorpórase el siguiente artículo 226 undecies:</p> <p>“Artículo 226 undecies.- Utilización de medios de prueba. Los antecedentes o evidencia obtenidos mediante la aplicación de las facultades previstas en este Párrafo y que resulten irrelevantes para el procedimiento serán entregados o devueltos en su oportunidad a las personas afectadas y se destruirá todo registro, transcripción o copia de ellos por el Ministerio Público.</p> <p>Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellos antecedentes o evidencia que pudieren ser útiles o relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos en cuya investigación fueren también aplicables las disposiciones de este Párrafo.</p>	<p><u>Número 21</u></p> <p>35.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo, readecuándose el orden de los números.</p>	

	Los resultados de las diligencias o medidas intrusivas establecidas en el presente Párrafo no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento cuando ellas hubiesen sido obtenidas fuera de los casos o sin haberse cumplido los requisitos que autorizan su procedencia.”.		
	<p>22. Incorpórase, a continuación del nuevo artículo 226 <u>undecies</u>, el siguiente epígrafe:</p> <p>“V. De las medidas de protección para agentes encubiertos, reveladores e informantes”</p>	<p><u>Número 22</u></p> <p><u>Encabezamiento</u></p> <p>36.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “undecies”, por la letra “L”.</p>	
	<p>23. Incorpóranse los siguientes <u>artículos 226 duodecies, 226 terdecies, 226 quáterdecies, 226 quindecies, 226 sexdecies, 226 septendecies, 226 octdecies y 226 nondecies</u>, nuevos:</p>	<p><u>Número 23</u></p> <p><u>Encabezamiento</u></p> <p>37.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar las expresiones “artículos 226 duodecies, 226 terdecies, 226 quáterdecies, 226 quindecies, 226 sexdecies, 226 septendecies, 226 octdecies y 226 nondecies” por “artículos 226 M, 226 N, 226 O, 226 P, 226 Q, 226 R, 226 S y 226 T”.</p>	

	<p>“Artículo 226 <u>duodecies</u>.- Medidas especiales de protección. Sin perjuicio de las reglas generales sobre protección a los testigos contempladas en este Código, en cualquier etapa del procedimiento, el Ministerio Público dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección que resulten adecuadas cuando estime, por las circunstancias del caso, que existe riesgo o peligro grave para la vida o la integridad física <u>de un informante o de un agente encubierto o revelador</u>, como asimismo de su cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto. Para proteger la identidad, domicilio, profesión y lugar de trabajo de los sujetos indicados en el inciso anterior, el fiscal podrá aplicar medidas tales como:</p> <p>a) Que en los registros de las diligencias que se practiquen no consten su nombre, apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pueda servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar una clave u otro mecanismo de verificación, para esos efectos.</p>	<p><u>Artículo 226 duodecies propuesto</u></p> <p><u>Inciso primero</u></p> <p>38.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar, en la denominación del artículo, la expresión “duodecies” por la letra “M”.</p> <p>39.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “de un informante o de un agente encubierto o revelador”, por la expresión “de un informante, agente encubierto o agente revelador”.</p>	
--	---	---	--

	<p>b) Que su domicilio, para efectos de notificaciones y citaciones, sea fijado en la sede de la fiscalía o del tribunal, debiendo el órgano interviniente hacerlas llegar reservadamente a su destinatario.</p> <p>c) Que las diligencias que tengan lugar durante el curso de la investigación, a las que deban comparecer como testigo, se realicen en un lugar distinto de aquél donde funciona la fiscalía y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo.</p>		
	<p>Artículo 226 <u>terdecies</u>.- Prohibición de revelación de información. Dispuesta la medida de protección de la identidad a que se refiere el artículo anterior, el tribunal, sin audiencia de los intervinientes, deberá decretar la prohibición de revelar, en cualquier forma, la identidad de <u>testigos protegidos</u> o los antecedentes que conduzcan a su identificación. Asimismo, deberá decretar la prohibición para que sean fotografiados, o se capte su imagen a través de cualquier otro medio.</p> <p>La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcione la información. En caso de que la</p>	<p><u>Artículo 226 terdecies propuesto</u></p> <p><u>Inciso primero</u></p> <p>40.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar, en la denominación del artículo, la expresión “terdecies” por la letra “N”.</p> <p>41.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “testigos protegidos” por la expresión “los sujetos protegidos”.</p>	

	<p>información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá, además, a su director, una multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.</p> <p>En ningún caso el tribunal podrá fundar la condena únicamente en declaraciones realizadas por agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, respecto de los cuales se haya decretado la prohibición de revelación de su identidad.</p>		
	<p>Artículo 226 quáterdecies.- Declaración en juicio. Las declaraciones de los agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, cuando se estime necesario para su seguridad personal, podrán ser recibidas anticipadamente en conformidad con el artículo 191 de este Código. En este caso, el juez de garantía podrá disponer que los testimonios de estas personas se presten por cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal. Igual sistema de declaración protegida podrá disponerse por el tribunal de juicio oral en lo penal, en su caso.</p>	<p><u>Artículo 226 quáterdecies propuesto</u></p> <p>42.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:</p> <p>“Artículo 226 O.- Declaración en juicio. Las declaraciones de los agentes encubiertos, agentes reveladores o de testigos y peritos a los que se les otorgue la calidad de informantes, podrán ser recibidas anticipadamente en conformidad con el artículo 191 de este Código cuando se estimare necesario para su seguridad personal. En este caso, el juez de garantía podrá disponer que los testimonios de estas personas se presten por cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal. Igual sistema de declaración protegida podrá disponerse por el tribunal de juicio oral en lo penal, en su caso.</p>	

	<p>Sea que la declaración se preste de manera anticipada o en el desarrollo del juicio oral propiamente tal, el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pudiere poner en peligro la protección de ésta.</p> <p>En ningún caso, sus declaraciones como testigo protegido podrán ser recibidas e introducidas en el juicio sin que la defensa haya podido ejercer su derecho a contrainterrogarlo personalmente, con los resguardos contemplados en los incisos precedentes.</p> <p>Dispuesta por el fiscal la protección de la identidad de los testigos en la etapa de investigación, el tribunal deberá mantenerla, sin perjuicio de los otros derechos que se confieren a los demás intervinientes.</p>	<p>Sea que la declaración se preste de manera anticipada o en el desarrollo del juicio oral propiamente tal, el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del agente encubierto o revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pudiere poner en peligro la protección de ésta.</p> <p>En ningún caso, las declaraciones de los agentes encubiertos o reveladores o de los informantes podrán ser recibidas e introducidas al juicio sin que la defensa haya podido ejercer su derecho a contrainterrogarlo personalmente, con los resguardos contemplados en los incisos precedentes.</p> <p>Dispuesta por el fiscal la protección de la identidad de los testigos o peritos en la etapa de investigación, el tribunal deberá mantenerla, sin perjuicio de los otros derechos que se confieren a los demás intervinientes.”.</p>	
	<p>Artículo 226 <u>quindecies</u>.- Protección policial. De oficio o a petición del</p>	<p><u>Artículo 226 quindecies propuesto</u></p>	

	interesado, durante el desarrollo del juicio, o incluso una vez que éste hubiere finalizado, si las circunstancias de peligro se mantienen, el fiscal o el tribunal otorgarán protección policial a quien la necesitare, de conformidad a lo prevenido en el artículo 308 de este Código.	43.- De Su Excelencia el Presidente de la República , para reemplazar, en la denominación del artículo, la expresión “quince” por la letra “P”.	
	Artículo 226 <u>sexdecies</u> .- Medidas de protección complementarias. Las medidas de protección antes descritas podrán ir acompañadas de otras medidas complementarias que se estimen idóneas en función del caso, si fuere necesario.	Artículo 226 sexdecies propuesto 44.- De Su Excelencia el Presidente de la República , para reemplazar, en la denominación del artículo, la expresión “sexdecies” por la letra “Q”.	
	Artículo 226 <u>septendecies</u> .- Cambio de identidad. El tribunal podrá autorizar a los agentes encubiertos, reveladores e informantes para cambiar de identidad, con posterioridad al juicio, en caso de ser necesario para su seguridad. La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación adoptará todos los resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas. Todas las actuaciones judiciales y administrativas a que dé lugar esta	<u>Artículo 226 septendecies propuesto</u> <u>Inciso primero</u> 45.- De Su Excelencia el Presidente de la República , para reemplazar, en la denominación del artículo, la expresión “septendecies” por la letra “R”.	

	<p>medida serán secretas. El funcionario del Estado que violare este sigilo será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.</p> <p>Quienes hayan sido autorizados para cambiar de identidad sólo podrán usar sus nuevos nombres y apellidos en el futuro. El uso malicioso de su anterior identidad será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.</p>		
	<p>Artículo 226 <u>octodecies</u>.- Secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos. Si el Ministerio Público estimare que existe riesgo para la seguridad de los agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidos en secreto respecto de uno o más intervinientes.</p> <p>Se aplicará lo dispuesto en el artículo 182 de este Código, pero el Ministerio Público podrá disponer que se mantenga el secreto hasta el cierre de la investigación. Además, deberá adoptar medidas para garantizar que el término del secreto no ponga en riesgo la seguridad de las personas mencionadas en el inciso anterior.</p>	<p><u>Artículo 226 octodecies propuesto</u></p> <p><u>Inciso primero</u></p> <p>46.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar, en la denominación del artículo, la expresión “octodecies” por la letra “S”.</p>	

	<p>Artículo 226 <u>nondecies</u>.- Violación del secreto de la investigación y de la identidad. La violación del secreto de la investigación y de la identidad de las personas a que se refieren los artículos precedentes será castigada con presidio menor en su grado máximo e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.”.</p>	<p><u>Artículo 226 nondecies propuesto</u></p> <p>47.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar, en la denominación del artículo, la expresión “nondecies” por la letra “T”.</p>	
		<p>Número nuevo</p> <p>48.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para introducir el siguiente número 24, nuevo, ajustándose el orden correlativo de los números siguientes:</p> <p>“24. Agréganse los siguientes artículos 226 U y 226 V, nuevos:</p> <p>“Artículo 226 U.- Valoración de la prueba y condena. El tribunal valorará el testimonio de agentes encubiertos, reveladores e informantes conforme a las reglas de la sana crítica.</p> <p>En ningún caso el tribunal podrá fundar la condena únicamente en declaraciones realizadas por agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, respecto de los cuales se haya decretado la prohibición de revelación de su identidad.</p>	

		<p>Artículo 226 V.- Protección de las víctimas. Es deber del Ministerio Público y de las policías otorgar protección a las víctimas de delitos o de amenazas emanadas de asociaciones delictivas o criminales. El fiscal podrá aplicar o solicitar, según sea el caso, la aplicación de las medidas previstas en este párrafo, aun cuando la víctima no interviniera como testigo o informante.”.</p>	
	<p>24. Incorpórase a continuación del artículo 226 <u>nondecies</u> el siguiente epígrafe nuevo:</p> <p>“VI. Regla común al presente párrafo”.</p>	<p><u>Número 24</u> (consultado por el Ejecutivo como número 25)</p> <p><u>Encabezamiento</u></p> <p>49.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “nondecies”, por la letra “V”.</p>	
	<p>25. Incorpóranse los siguientes artículos 226 <u>vicies</u> y 226 <u>semel et vicies</u>, nuevos:</p>	<p><u>Número 25</u> (consultado por el Ejecutivo como número 26)</p> <p><u>Encabezamiento</u></p> <p>50.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar las expresiones “vicies” y “semel et vicies”, por las letras “W” y “X”, respectivamente.</p> <p><u>Artículo 226 vicies propuesto</u></p> <p><u>Inciso primero</u></p>	

	<p>“Artículo 226 <u>vicies</u>. - Hallazgo casual con ocasión de diligencias especiales de investigación. Si con motivo de las diligencias especiales de investigación previstas en este párrafo, y en el marco de la autorización concedida por el juez para su ejecución, se arribare a hallazgos de objetos, documentos o antecedentes de los cuales no se tenía noticia, que permitieren sospechar de la existencia de un hecho punible distinto, dichos objetos, documentos o antecedentes podrán ser utilizados para la posterior persecución del delito descubierto, cuando éste tenga asignada una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo o una pena igual o superior a la del delito objeto de la investigación.</p> <p>Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará a la interceptación de comunicaciones, las que se regirán por lo indicado en el inciso final del artículo 223.</p>	<p>51.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar, en la denominación del artículo, la expresión “vicies” por la letra “W”.</p>	
	<p>Artículo 226 <u>semel et vicies</u>. - Regla especial referida a delitos terroristas. Cuando se hubieren cometido o preparado la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 18.314, las diligencias especiales de investigación previstas en este párrafo podrán ser utilizadas por el fiscal, sea que se trate de una persona, de una agrupación de</p>	<p><u>Artículo 226 semel et vicies propuesto</u></p> <p>52.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir, en la denominación del artículo, la expresión “semel et vicies” por la letra “X”.</p>	

	dos o más personas o de una asociación delictiva o criminal.”.		
<p style="text-align: center;">Título II Preparación del juicio oral Párrafo 1º Acusación</p> <p>Artículo 259.- Contenido de la acusación. La acusación deberá contener en forma clara y precisa:</p> <p>a) La individualización de el o los acusados y de su defensor;</p> <p>b) La relación circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica;</p> <p>c) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal;</p> <p>d) La participación que se atribuyere al acusado;</p> <p>e) La expresión de los preceptos legales aplicables;</p> <p>f) El señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensare valerse en el juicio;</p>		<p style="text-align: center;">ooooo</p> <p style="text-align: center;">Número nuevo</p> <p>53.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar un número 27, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“27. Modifícase el artículo 259 en el siguiente sentido:</p>	

<p>g) La pena cuya aplicación se solicitare, y h) En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado.</p> <p>Si, de conformidad a lo establecido en la letra f) de este artículo, el fiscal ofreciere rendir prueba de testigos, deberá presentar una lista, individualizándolos con nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia, salvo en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 307, y señalando, además, los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones. En el mismo escrito deberá individualizar, de igual modo, al perito o los peritos cuya comparecencia solicitare, indicando sus títulos o calidades.</p> <p>La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectúe una distinta calificación jurídica.</p>		<p>a) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto, del siguiente tenor:</p> <p>“Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias o, de ser procedente, del comiso por valor equivalente, deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, señalando los medios de prueba de que piensa valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente.”.</p> <p>b) Introdúcese en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso cuarto, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Con todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos previstos por la ley.”.</p>	
--	--	---	--

<p>Artículo 348.- Sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria fijará todas las penas principales y accesorias que corresponda imponer, con indicación específica de cada una de ellas, y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las penas sustitutivas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.</p> <p>La sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará ésta a contarse y fijará el tiempo de detención, prisión preventiva y privación de libertad impuesta en conformidad a la letra a) del artículo 155 que deberá servir de abono para su cumplimiento. Para estos efectos, se abonará a la pena impuesta un día por cada día completo, o fracción igual o superior a doce horas, de dichas medidas cautelares que hubiere cumplido el condenado.</p> <p>La sentencia condenatoria dispondrá también el comiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.</p> <p>Cuando se hubiere declarado falso, en todo o en parte, un instrumento público, el tribunal, junto con su devolución,</p>		<p>Número nuevo</p> <p>54.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar un número 28, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“28. Introdúcese, en el inciso tercero del artículo 348, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “En cuanto al comiso de las ganancias del delito o del valor equivalente de efectos o instrumentos del delito, si éstas o aquél ascendieren a un monto superior a 400 unidades tributarias mensuales, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. De lo contrario, el tribunal lo</p>	
--	--	--	--

<p>ordenará que se lo reconstituya, cancele o modifique de acuerdo con la sentencia.</p> <p>Cuando se pronunciare la decisión de condena, el tribunal podrá disponer, a petición de alguno de los intervinientes, la revisión de las medidas cautelares personales, atendiendo al tiempo transcurrido y a la pena probable.</p>		<p>impondrá en la misma sentencia condenatoria si fuere procedente.”.”.</p> <p>ooooo</p>	
		<p>Número nuevo</p> <p>55.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un número 29, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“29. Introdúcese el siguiente artículo 348 bis, nuevo:</p> <p>“Artículo 348 bis.- Comiso de ganancias y comiso por valor equivalente. En caso de haberse solicitado la aplicación del comiso de ganancias o de valor equivalente por un monto superior a 400 unidades tributarias mensuales, o si la aplicación del comiso afecta a terceros, en la sentencia condenatoria se citará a una audiencia especial.</p> <p>Si el comiso sólo afecta personas que han sido condenadas, la audiencia tendrá lugar dentro de décimo día a contar de la fecha de la sentencia. Si el comiso afecta a terceros, la audiencia no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados</p>	

		<p>desde la fecha de la notificación de la sentencia a los afectados.</p> <p>La resolución y la audiencia respectiva se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 415 quáter, 415 quinquies y 415 sexies.</p> <p>El tribunal pronunciará su decisión de imposición del comiso o rechazo de la solicitud. En el primer caso determinará el monto por el cual se lo impone. De haber bienes asegurados para hacerlo efectivo, los deberá identificar.”.”.</p>	
<p>Artículo 391.- Contenido del requerimiento. El requerimiento deberá contener:</p> <p>a) La individualización del imputado;</p> <p>b) Una relación sucinta del hecho que se le atribuyere, con indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes;</p> <p>c) La cita de la disposición legal infringida;</p> <p>d) La exposición de los antecedentes o elementos que fundamentaren la imputación;</p> <p>e) La pena solicitada por el requirente, y</p>		<p>Número nuevo</p> <p>56.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar un número 30, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“30. Introdúcese en el artículo 391 el siguiente inciso segundo, nuevo:</p> <p>“Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias o del comiso por</p>	

f) La individualización y firma del requirente.		valor equivalente de bienes o instrumentos, deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, exponiendo los antecedentes o elementos en los que ella se basa.”.”.	
<p>Artículo 396.- Realización del juicio. El juicio simplificado deberá tener lugar en la misma audiencia en que se proceda con su preparación, si ello fuere posible, o a más tardar dentro de trigésimo día.</p> <p>El juicio simplificado comenzará dándose lectura al requerimiento del fiscal y a la querella, si la hubiere. En seguida, se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba, tras lo cual se preguntará al imputado si tuviere algo que agregar. Con su nueva declaración o sin ella, el juez pronunciará su decisión de absolución o condena, y fijará una nueva audiencia, para dentro de los cinco días próximos, para dar a conocer el texto escrito de la sentencia. Sin perjuicio de lo anterior, si el vencimiento del plazo para la redacción del fallo coincidiera con un día domingo o festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo o festivo.</p> <p>La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en la misma.</p>		<p>Número nuevo</p> <p>57.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar un número 31, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“31. Introdúcese, en el artículo 396, el siguiente inciso final, nuevo:</p>	

<p>Sin embargo, si no hubiere comparecido algún testigo o perito cuya citación judicial hubiere sido solicitada de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 393 y el tribunal considerare su declaración como indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días, transcurridos los cuales deberá proseguirse conforme a las reglas generales, aun a falta del testigo o perito.</p> <p>En caso que el imputado requerido, válidamente emplazado, no asista injustificadamente a la audiencia de juicio por segunda ocasión, el tribunal deberá recibir, siempre que considere que ello no vulnera el derecho a defensa del imputado, la prueba testimonial y pericial del Ministerio Público, de la defensa y del querellante, en carácter de prueba anticipada, conforme a lo previsto en el artículo 191 de este Código, sin que sea necesaria su comparecencia posterior al juicio.</p>			
<p>Artículo 411.- Trámite en el procedimiento abreviado. Acordado el procedimiento abreviado, el juez abrirá el</p>		<p>Número nuevo</p> <p>58.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un número 32, nuevo, del siguiente tenor:</p>	

<p>debate, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.</p>		<p>“32. Introdúcese en el artículo 411 el siguiente inciso segundo, nuevo:</p> <p>“Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias o del comiso por valor equivalente de bienes e instrumentos, deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud.”.”.</p>	
<p>Artículo 413.- Contenido de la sentencia en el procedimiento abreviado. La sentencia dictada en el procedimiento abreviado contendrá:</p> <p>a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes;</p> <p>b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación y de la aceptación por el acusado, así como de la defensa de éste;</p> <p>c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos que se dieran por probados sobre la base de la aceptación que el acusado hubiere</p>		<p>Número nuevo</p> <p>59.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para contemplar un número 33, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“33. Introdúcese, en el artículo 413, el siguiente inciso final, nuevo:</p>	

<p>manifestado respecto a los antecedentes de la investigación, así como el mérito de éstos, valorados en la forma prevista en el artículo 297;</p> <p>d) Las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar su fallo;</p> <p>e) La resolución que condenare o absolviere al acusado. La sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la aplicación de alguna de las penas sustitutivas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley;</p> <p>f) El pronunciamiento sobre las costas, y g) La firma del juez que la hubiere dictado.</p> <p>La sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará ésta a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de abono para su cumplimiento.</p> <p>La sentencia condenatoria dispondrá también el comiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.</p>		<p>“Si el fiscal hubiere solicitado el comiso de ganancias o del comiso por valor equivalente de efectos o instrumentos del delito por un monto igual o inferior a 400 unidades tributarias mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto es superior o si el comiso afecta a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”.</p>	
---	--	--	--

		<p>Número nuevo</p> <p>60.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar un número 34, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“34. Introdúcese, en el Libro Cuarto, el siguiente Título III bis, nuevo:</p> <p>“Título III bis Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa</p> <p>Artículo 415 bis.- Ámbito de aplicación. Las reglas del presente título son aplicables en los casos en que la ley dispone el comiso de bienes o activos obtenidos a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa al hecho.</p> <p>En esos casos, la resolución que ponga término a la investigación o juicio respectivo no obstará a la competencia del tribunal para conocer de este procedimiento.</p>	
		<p>Artículo 415 ter.- Citación. Habiéndose incautado bienes o habiéndolos asegurado conforme al artículo 157, para hacer efectivo el comiso, en la última resolución que recaiga sobre la respectiva investigación o juicio, poniéndole término temporal o definitivo, el tribunal, a petición del Ministerio</p>	

		Público, citará a audiencia especial de comiso, la que no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la resolución.	
		<p>Artículo 415 quáter.- Preparación. La resolución ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal deberá formular la respectiva solicitud al menos cinco días antes de la fecha de la audiencia.</p> <p>La resolución será notificada a todas las personas que conforme a la ley podrían ser afectadas en su propiedad o patrimonio por la imposición del comiso, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha de la audiencia.</p>	
		<p>Artículo 415 quinquies.- Audiencia y prueba. La audiencia comenzará con la lectura de la solicitud de aplicación del comiso formulada por el Ministerio Público. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba.</p> <p>La prueba de los hechos de los que depende la procedencia del comiso, incluido su monto, será producida conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 297. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba</p>	

		preponderante producida durante la audiencia.	
		Artículo 415 sexies.- Suspensión de la audiencia. La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en ella. Sin embargo, si falta una prueba anunciada por las partes que el tribunal considere indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su producción. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días.	
		Artículo 415 septies.- Contenido de la sentencia. La sentencia en el procedimiento de comiso sin condena previa contendrá: a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes. b) La enunciación de la solicitud del Ministerio Público y de las defensas de los afectados, y sus fundamentos respectivos. c) El análisis somero de la prueba producida. d) Las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo, en particular las que se refieren a la	

		<p>existencia del hecho ilícito del que proceden las ganancias o su conexión con los instrumentos o efectos de que se trate.</p> <p>e) La decisión del asunto, imponiendo el comiso o denegándolo, y en el primer caso determinando el monto por el cual se lo impone.</p>	
		<p>Artículo 415 octies.- Recursos. Si la sentencia que impone o deniega el comiso sin condena fuere dictada por un tribunal oral en lo penal, procederá en su contra el recurso de nulidad y el recurso de apelación del monto del comiso. En caso de interponerse ambos, el requirente deberá apelar en subsidio del recurso de nulidad.</p> <p>El recurso de nulidad procederá por cualquiera de las causales previstas en los artículos 373 y 374 y deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso sin condena. Su interposición y tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto del Libro Tercero. El tribunal que conozca del recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 348 bis o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo.</p>	

		<p>Tratándose de una sentencia dictada por un juez de garantía, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso sin condena. El tribunal que conozca del recurso podrá revocar la decisión que concede o deniega el comiso sin condena y dictar sentencia de reemplazo, o podrá modificar el monto fijado por el tribunal a quo.”.</p>	
		<p>Artículo 415 nonies.- Ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia que impone el comiso, ella será ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 469 bis.”.”.</p>	
		<p>Número nuevo</p> <p>61.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar un número 35, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“35. Introdúcese un artículo 469 bis, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“Artículo 469 bis.- Ejecución del comiso de ganancias o del comiso por valor equivalente. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito, o del valor equivalente de los instrumentos y efectos provenientes del delito, será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.</p>	

		<p>En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.”.”.</p>	
<p>LEY N° 18.216 ESTABLECE PENAS QUE INDICA COMO SUSTITUTIVAS A LAS PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD</p> <p>TITULO PRELIMINAR</p> <p>Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes penas:</p> <p>a) Remisión condicional. b) Reclusión parcial. c) Libertad vigilada. d) Libertad vigilada intensiva. e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34. f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.</p>	<p>Artículo 3.- Intercálase en el artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, el siguiente inciso quinto nuevo, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser sexto y séptimo, respectivamente:</p>		

<p>No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter y 391 del Código Penal; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º y en el artículo 3º de la ley N°17.798, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.</p> <p>En ningún caso podrá imponerse la pena establecida en la letra f) del inciso primero a los condenados por crímenes o simples delitos señalados por las leyes números 20.000, 19.366 y 18.403. No se aplicará ninguna de las penas sustitutivas contempladas en esta ley a las personas que hubieren sido condenadas con anterioridad por alguno de dichos crímenes o simples delitos en virtud de sentencia ejecutoriada, hayan cumplido o no efectivamente la condena, a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000.</p>	<p>“De la misma forma, no procederán las penas señaladas en el inciso primero o en el artículo 33 tratándose de los</p>		
---	---	--	--

<p>Tampoco podrán imponerse las penas establecidas en el inciso primero a los condenados por crímenes o simples delitos contemplados en la ley N° 17.798, salvo que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista en el artículo 17 C de dicho cuerpo legal.</p> <p>Tratándose de simples delitos previstos en dicha ley y no encontrándose en el caso del inciso anterior, sólo procederán las penas sustitutivas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva.</p> <p>Tampoco podrá el tribunal aplicar las penas señaladas en el inciso primero a los autores del delito consumado previsto en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por alguno de los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código.</p> <p>Para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito.</p> <p>Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su</p>	<p>autores del delito consumado previsto en el artículo 293 del Código Penal, salvo respecto a quienes hayan cooperado eficazmente con la investigación.”.</p>		
--	--	--	--

duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.			
<p>DECRETO LEY N° 321 DE 1925, DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE ESTABLECE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA LAS PERSONAS CONDENADAS A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD</p> <p>Artículo 3°.- Las personas condenadas a presidio perpetuo calificado sólo podrán postular a la libertad condicional una vez que hubieren cumplido cuarenta años de privación de libertad efectiva. Si la solicitud del beneficio fuere rechazada, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos dos años desde su última presentación.</p> <p>Las personas condenadas a presidio perpetuo sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte años de privación de libertad.</p> <p>Asimismo, las personas condenadas por los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, y por los delitos contemplados en el número 2° del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinquies, 367, 411 quáter, 436 y</p>	<p>Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, el siguiente inciso sexto nuevo, pasando el actual sexto a ser séptimo:</p>		

<p>440, todos del Código Penal, homicidio de miembros de las policías, de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile y de Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones, y el de elaboración o tráfico de estupefacientes, sólo podrán postular a este beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.</p> <p>Las personas condenadas a dos o más penas, cuya suma alcance o supere los cuarenta años de privación de libertad, sólo podrán postular al beneficio de libertad condicional una vez que hayan cumplido veinte años de reclusión. En caso de concederse, el período de supervisión a que se refiere el artículo 8° se extenderá hasta cumplir cuarenta años contados desde el inicio de la condena.</p> <p>Las personas condenadas por los incisos tercero y cuarto del artículo 196 de la ley N° 18.290, de Tránsito, podrán postular a este beneficio sólo una vez que hayan cumplido dos tercios de la condena.</p>	<p>“Las personas condenadas por el delito contemplado en el artículo 293 del Código Penal sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena, salvo quienes hubieren cooperado eficazmente con la investigación, los que podrán postular de</p>		
---	---	--	--

<p>Las personas condenadas a presidio perpetuo por delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad y, además condenadas por delitos sancionados en otros cuerpos legales, podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido diez años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998 y suscriban, en forma previa, una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia.</p>	<p>conformidad a lo señalado en el artículo anterior.”.</p>		
	<p>Artículo 5°. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.</p> <p>Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.</p> <p>Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.</p>		

	<p>Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberán tomar en consideración todas las normas sustantivas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.</p> <p>Para efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.”.</p>		
<p>CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES TÍTULO VII § 6. Reglas sobre competencia civil de los tribunales en lo criminal</p> <p>Art. 171. La acción civil que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa, deberá interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.</p> <p>Dicho tribunal conocerá también todas las restantes acciones que la víctima deduzca respecto del imputado para perseguir las responsabilidades civiles</p>		<p>Artículo nuevo</p> <p>62.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un artículo 6, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“Artículo 6.- Modifícase el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales, en el siguiente sentido:</p> <p>a) Sustitúyese el inciso primero, por el siguiente:</p> <p>"La acción civil que tenga por objeto la restitución de la cosa y la que tenga por objeto la imposición del comiso de las ganancias provenientes del delito o, en los casos en que la ley lo disponga aun sin sentencia condenatoria, del hecho ilícito que corresponde al delito, deberán interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.”.</p>	

<p>derivadas del hecho punible, y que no interponga en sede civil.</p> <p>Con la excepción indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren personas distintas de la víctima, o se dirigieren contra personas diferentes del imputado, sólo podrán interponerse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales.</p> <p>Será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, el tribunal civil mencionado en el inciso anterior.</p>		<p>b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:</p> <p>“El tribunal civil mencionado en el inciso anterior será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, así como de la sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito que corresponda al delito o, en su caso, del valor equivalente a los efectos o instrumentos del delito.”.</p>	
		<p>Artículo transitorio nuevo</p> <p>63.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para introducir un artículo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:</p> <p>“Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en el presupuesto de la Dirección General de Crédito Prendario</p>	

		y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con los recursos que se traspasen de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.”.	
--	--	--	--

Ante olas de delitos violentos de las últimas ghoras **Senador van Rysselberghe pide aplicar planes especiales de seguridad en el gran Concepción**

El senador por la región del Bio Bio, Enrique van Rysselberghe, manifestó su preocupación por los hechos de violencia que en las últimas horas se han vivido en el Gran Concepción, y realizó un llamado al gobierno a aplicar a la brevedad posible planes especiales de seguridad en el gran Concepción, similares a los que se están aplicando en Santiago.


Van Rysselberghe señaló que ***“en las últimas horas, en el gran Concepción, se han vivido una serie de hechos delictuales que son de la mayor gravedad y que ameritan que el gobierno tome medidas concretas y más drásticas para combatirlas”***

Para el parlamentario UDI, ***“la quema de maquinarias en Chiguayante; la muerte de una menor en Hualpén proyecto de una balacera en su población; o la balacera en Chiguayante que obliga a los estudiantes a resguardarse bajo las mesas de sus salas, son hechos que demuestran que la violencia y la inseguridad están comenzando a desbordarse en el gran Concepción”***.

En ese sentido, Van Rysselberghe afirmó que ***“en la comisión de seguridad del senado, de la cual soy miembro, escuchamos con frecuencia al gobierno exponer sobre los planes especiales de seguridad que se aplican en Santiago: hay un plan anti portonazos, un plan anti-encerronas, un plan anti-asaltos a las salidas de los barcos y un plan anti turbazos, que han permitido disminuir la frecuencia de estos delitos en la capital.”***

Frente a lo anterior, el senador por el Bio Bío aseguró que ***“creo que es necesario que estos mismos planes que se aplican en la capital, comiencen a aplicarse a la brevedad posible en el gran Concepción, de manera de poder controlar los actos comunales de los últimos días y devolver, en parte, la sensación de seguridad”*** a los vecinos de las comunas de la provincia de Concepcion.

Finalmente, el senador van Rysselberghe aseguró que ***“utilizaremos las vías formales para consultarle al ministerio de interior sobre las medidas que se están tomando en el gran Concepción para enfrentar esta ola de delincuencia y aprovecharemos de solicitar la aplicación inmediata de los mismos planes especiales de seguridad que hay en Santiago en nuestro capital regional”***.



Concepción, lunes 28 de noviembre de 2022.-

Señor
Luis Marcelo Troncoso Muñoz
Superintendente
Cuerpo de Bomberos de Mulchén
Presente

Estimado Superintendente:


Por medio de esta nota, agradezco profundamente la invitación que me realizó para participar en el acto solemne de conmemoración de los 113 años de vida del Cuerpo de Bomberos de Mulchén, a realizarse en la Plaza de Armas de la comuna, el próximo 4 de diciembre.

Lamentablemente, compromisos agendados con anterioridad en otra comuna de nuestra Región del Bio Bio, me impiden participar de esta inauguración.

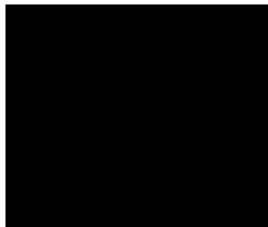
Pese a lo anterior, quiero aprovechar la oportunidad de reafirmar mi compromiso y deseo de colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Mulchén, de manera que podamos trabajar en conjunto para cumplir con todos los requerimientos que tengan para continuar cumpliendo de la mejor manera posible su gran labor diaria en beneficio de la comunidad y vecinos de Mulchén.

Sólo me resta agradecer una vez más su invitación, estimado superintendente, reiterar mi compromiso con el trabajo con el Cuerpo de Bomberos de Mulchén y enviarle un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes.

Atentamente,



ENRIQUE VAN RYSELBERGHE HERRERA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
REGIÓN DEL BIO BIO



Concepción, lunes 11 de noviembre de 2022.-

Señor
Maurice Khamis Massú.
Presidente
Comunidad Palestina en Chile.
Presente

Estimado presidente:

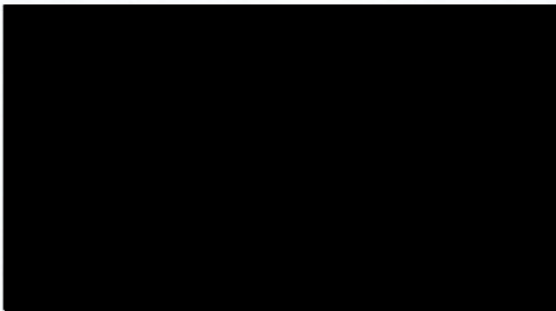
Por medio de esta nota, agradezco profundamente la invitación que me realizó para participar en una cena de camaradería, a realizarse en su casa de la comuna de Lo Barnechea, el próximo lunes 14 de noviembre.

Lamentablemente, compromisos agendados con anterioridad en la Región del Bio Bio, la cual represente en el Senado de la república, me impiden participar de esta cena.

Pese a lo anterior, quiero aprovechar la oportunidad de reafirmar mi compromiso y deseo de colaboración con la comunidad palestina en Chile, la cual tiene una fuerte presencia en la Región del Bio Bio y, particularmente, en la ciudad de Concepción donde resido, lo cual me ha permitido no solo conocer su labor, sino que además forjar importantes lazos de amistad, cariño y fraternidad con miembros de esta comunidad.

Sólo me resta agradecer una vez más su invitación, reiterar mi compromiso con el trabajo con la Comunidad Palestina en Chile y enviarle un cariñoso abrazo a cada uno de los asistentes.

Atentamente,



ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
REGIÓN DEL BIO BIO



Concepción, miércoles 08 de noviembre de 2022.-

Señor
Alberto Pirola G.
Presidente
Hoteleros de Chile A.G.
Presente

Estimado presidente:

Por medio de esta nota, agradezco profundamente la invitación que me realizó para participar en la ceremonia y cena inaugural del XIII Congreso Hotelero, a realizarse el próximo 09 de noviembre, en el Polo Santa Amelia de la comuna de Negrete.

Lamentablemente, compromisos agendados con anterioridad en otra comuna de la nuestra Región del Bio Bio, me impiden participar de esta inauguración.

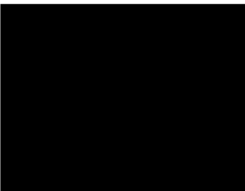
Pese a lo anterior, quiero aprovechar la oportunidad de reafirmar mi compromiso con el mundo turístico, uno de los futuros polos económicos de la Región del Bio Bio y particularmente de la Provincia del Bio Bio, y que en el corto plazo permitirá generar nuevas líneas de negocios y desarrollo económico, social y comercial para estos territorios, permitiendo que miles de familias mejoren sustancialmente su calidad de vida.

Sólo me resta agradecer una vez más su invitación, reiterar mi compromiso con el trabajo del mundo turístico y hotelero de la Región del Bio Bio y enviarle un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes.

Atentamente,



ENRIQUE VAN RYSELBERGHE HERRERA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
REGIÓN DEL BIO BIO



Concepción, lunes 28 de noviembre 2022.-

Señora
Manuel Coloma Martínez
Presidente
Unión Comunal de Juntas de Vecinos
Talcahuano
Presente

Estimada Presidente:

Por medio de esta nota, agradezco profundamente la invitación que me realizó para participar en la "Sesión Solemne de la Unión Comunal", a realizarse el miércoles 07 de diciembre, en el Liceo Bicentenario Anita Serrano.


Lamentablemente, compromisos agendados con anterioridad en otra comuna de la nuestra Región del Bio Bio, me impiden participar de esta sesión solemne.

Pese a lo anterior, quiero aprovechar esta oportunidad para comprometer mi apoyo y trabajo, junto a la nueva directiva encabezada por don Manuel Coloma y al alcalde de la comuna, Don Henry Campos, en todas las iniciativas que la Unión comunal se proponga en beneficio de los vecinos de la ciudad, así como continuar en nuestro esfuerzo conjunto por conseguir la tan anhelada nueva sede propia para la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talcahuano.

También quiero aprovechar esta oportunidad para entregar mi reconocimiento a la directiva saliente y, en particular a doña Maritza Vergara, quien fue la presidenta de esta unión comunal en el último periodo y que continuará colaborando con su experiencia a esta nueva directiva.

Sólo me resta agradecer una vez más su invitación, reiterar mi compromiso con el trabajo La Unión Comunal de Juntas de Vecinos en Talcahuano y enviarle un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes.

Atentamente,



ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
REGIÓN DEL BIO BIO

**INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UNA LEY MARCO SOBRE
CIBERSEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN**

BOLETÍN N° 14.847-06

1.- Al numeral 9. del Artículo N°2, Definiciones:

- Para eliminar la palabra “instalaciones” y la frase “equipos físicos y de tecnología de la información”, quedando el numeral de la siguiente forma:

9. *Infraestructura Crítica de la Información:* *corresponde a aquellas redes, sistemas, plataformas y servicios cuya afectación, degradación, denegación de servicio, interceptación, interrupción o destrucción puede tener una repercusión importante en la seguridad nacional, en la provisión de servicios esenciales, en el efectivo cumplimiento de las funciones del Estado y, en general, de los servicios que éste debe proveer o garantizar.*

2.- Al numeral 1. del Artículo N°3, Principios Rectores:

- Para cambiar la frase “ofrece u opera” por la frase “ desarrolla, ofrece u opera”, quedando el numeral de la siguiente forma:

1.- *Principio de responsabilidad:* *aquel en cuya virtud la seguridad de las redes, sistemas y datos es de responsabilidad de aquel que las desarrolla, ofrece u opera, con independencia de la naturaleza pública o privada del organismo.*

3.- Al numeral 8. del Artículo N°3, Principios Rectores:

- Para reemplazarlo, quedando el numeral de la siguiente forma:

8. *Principio de especialidad:* *en materia regulatoria y sancionatoria, se preferirá la aplicación de lo dispuesto por el regulador o fiscalizador sectorial por sobre la establecida en esta ley.*

4.- Al artículo N°4, párrafo N°1, de Título II, de la determinación de la infraestructura crítica de la información.

- Para reemplazar la frase “al consejo técnico de” por la voz “a, quedando el inciso primero de la siguiente forma:

“Artículo 4. Calificación de la infraestructura de la información como crítica. Cada dos años, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública requerirá a la Agencia Nacional de Ciberseguridad un informe que detalle cuáles son aquellos sectores o instituciones que posean infraestructura de la información que deba ser calificada como crítica.”

5.- A la letra D) del Artículo N°9, del Título II, de la agencia Nacional de ciberseguridad

- Para eliminar la frase “a los CSIRT Sectoriales y a aquellos que pertenezcan a órganos del Estado señalados en el inciso final del artículo 4º, a instituciones privadas y”, quedando la letra de la siguiente forma:

D. Coordinar al CSIRT Nacional, en lo relativo a los estándares y tiempos de comunicación de incidentes de ciberseguridad o vulnerabilidades.

6.- A la letra G) del Artículo N°9, del Título II, de la agencia Nacional de ciberseguridad

- Para eliminar la frase “los CSIRT Sectoriales y del”, agradando a continuación a voz “al”, quedando la letra de la siguiente forma:

G. Requerir al CSIRT Nacional la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines y que sea de responsabilidad de estas instituciones.

7.- A la letra O) del Artículo N°9, del Título II, de la agencia Nacional de ciberseguridad

- Para reemplazarlo por el siguiente texto:

O. Diseñar, planes y acciones que fomenten la investigación, innovación y desarrollo de la industria de la ciberseguridad nacional con los ministerios competentes”.

8.- Al Artículo N° 16, Párrafo 3°, del registro nacional de incidentes de ciberseguridad.

- Para eliminar la frase “a los CSIRT sectoriales,”, quedando el inciso primero de la siguiente forma:

Artículo 16. *Del Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad.* *Créase el Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad, el que será administrado por la Agencia Nacional de Ciberseguridad y tendrá el carácter de reservado, por exigirle el debido cumplimiento de las funciones de la Agencia, el debido resguardo de los derechos de las personas y la seguridad de la nación. En este registro se ingresarán los datos técnicos y antecedentes necesarios para describir la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad, con su análisis y estudio. Sobre la base de este registro se podrán realizar las respectivas investigaciones por parte de la Agencia, así como comunicar las alertas a los órganos del Estado señalados en el inciso final del artículo 4º y a las instituciones privadas que posean infraestructura de la información calificada como crítica, que corresponda al caso.*

9.- Los artículos N°17, 18, 19, 20 y 21, y el párrafo N°4, Consejo Técnico de la agencia nacional de ciberseguridad.

- Para eliminarlos.

10.- A la letra B), del Artículo N°22, del párrafo 5°, Equipo nacional de respuesta de incidentes de seguridad informática

- Para eliminarlo.

11.- A la letra D), del Artículo N°22, del párrafo 5°, Equipo nacional de respuesta de incidentes de seguridad informática

- Para eliminarlo.

12.- A la letra E), del Artículo N°22, del párrafo 5°, Equipo nacional de respuesta de incidentes de seguridad informática

- Para eliminarlo.

13.- A la letra H), del Artículo N°22, del párrafo 5°, Equipo nacional de respuesta de incidentes de seguridad informática

- Para eliminarlo.

14.- A la letra i), del Artículo N°22, del párrafo 5°, Equipo nacional de respuesta de incidentes de seguridad informática

- Para eliminar la frase “conjuntamente con uno o más CSIRT Sectoriales,”, quedando la letra de la siguiente forma:

i) Responder en la gestión de un incidente de ciberseguridad o de un ciberataque, dependiendo de las capacidades y competencias de los órganos del Estado que concurren a su gestión, cuando estos puedan ocasionar un impacto significativo en el sector, institución u órgano del Estado, según corresponda. En estos casos, el CSIRT Nacional podrá recomendar, colaborar, compartir información, coordinar y realizar todas las acciones conjuntas necesarias para asegurar una respuesta rápida frente al incidente. Además, podrá supervisar la implementación de medidas de mitigación de corto plazo, e informarse de las medidas de largo plazo adoptadas.

15.- A la letra K), del Artículo N°22, del párrafo 5°, Equipo nacional de respuesta de incidentes de seguridad informática

- Para eliminar la frase “los otros CSIRT Sectoriales, de Gobierno y Defensa.”, y reemplazarla por “los reguladores o fiscalizadores sectoriales”, quedando la letra de la siguiente forma:

*“K) Crear y administrar para el cumplimiento de sus funciones una red electrónica de comunicaciones segura destinada a comunicar y compartir información con **los reguladores o fiscalizadores sectoriales**. El funcionamiento de la red de comunicaciones se establecerá en el reglamento de la presente ley.”*

16.- Los artículos N°23, 24, 25 y 26, y el Título IV, de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática sectoriales.

- Para eliminarlos.

17.- Los artículos N°27 y 28 y el Título V, de los CSIRT del sector público.

- Para eliminarlos.

18.- Al inciso primero del Artículo N° 29, del Título VI, de la reserva de información en el sector público en materia de ciberseguridad.

- Para eliminar la frase “los CSIRT, sean el CSIRT nacional, de gobierno, defensa o los CSIRT sectoriales” y reemplazarla por la frase “la agencial nacional de Ciberseguridad”, quedando el texto de la siguiente forma:

Artículo 29. De la reserva de información. *Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, datos, informaciones y registros que obren en poder de **la agencia nacional de ciberseguridad**, o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes respecto de los cuales el personal de tales órganos de la Administración del Estado tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas.*

19.- Al inciso tercero del Artículo N° 29, del Título VI, de la reserva de información en el sector público en materia de ciberseguridad.

- Para eliminar la frase “CSIRT, sean del CSIRT Nacional, de Gobierno, Defensa o de los CSIRT Sectoriales,” para reemplazarla por “la agencia nacional de ciberseguridad”, quedando el texto de la siguiente forma:

“Los funcionarios de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios.”

20.- A la letra A) del artículo N°33, Título VIII, de las infracciones y sanciones.

- Para e liminar la frase “Retardar o”, quedando el texto de la siguiente forma:

A) Entregar fuera del plazo señalado la información a la autoridad u órgano de la Administración del Estado habilitado para requerirla;

21.- A la letra B) del artículo N°33, Título VIII, de las infracciones y sanciones.

- Para e liminar la palabra “injustificadamente”, quedando el texto de la siguiente forma:

B) Negar información a la autoridad u órgano de la Administración del Estado habilitado para requerirla;

22.- Los artículos N°36, 37, 38, 39 y 40, y el Título VIII, del comité interministerial de ciberseguridad.

- Para eliminarlos.

23.- Al artículo N°41, y el Título IX, de las modificaciones a otros cuerpos legales

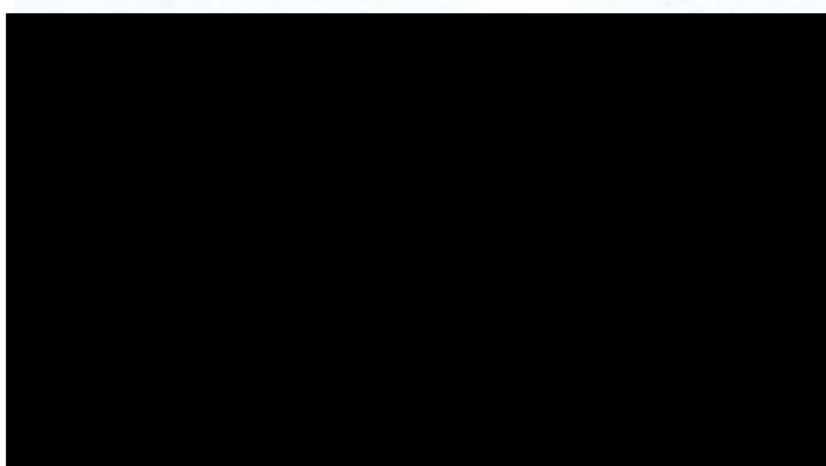
- Para eliminarlos.

24.- Al Artículo quinto Transitorio.

- Para eliminarlo.

25.- Al Artículo sexto Transitorio.

- Para eliminarlo.



ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
REGIÓN DEL BÍO BÍO

INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA PREVENIR LA VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA

BOLETÍN N° 15.077-15

Senadores Henrique Van Rysselberghe y Juan Antonio Coloma

1.- Al Artículo N°39 BIS, para agregar un nuevo inciso final nuevo:

“La omisión de la información señalada, dará lugar al rechazo de la inscripción.”

2.- Reemplacese el inciso final del artículo 56 por el siguiente:

“El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, o circulen con placa patente oculta o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados”.

3.- Para reemplazar el numeral 2 de la propuesta por el siguiente:

“2.- Agréguese un inciso final nuevo al artículo 62 del siguiente tenor:

Las características técnicas establecidas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones deberán, además, establecer que los vehículos motorizados tengan grabada de forma permanente, mediante técnica de desgaste por arenado o similar, la placa patente única en sus vidrios y espejos laterales, según corresponda, y disponer de toda otra medida que dificulte la comercialización de vehículos hurtados o robados. Los vendedores habituales no podrán hacer entrega de los mismos sin el grabado permanente señalado.”.

4.- Reemplazar en numeral 4 propuesto por el siguiente:

“Conduzca un vehículo sin placa patente o con ella oculta. Se entenderá que está oculta cuando se disponga de cualquier elemento, fijo o removible, que dificulte su identificación total o parcialmente”.

5.- El numeral 5 de la propuesta pasa a ser 6 y se incorpora un nuevo numeral 5 del siguiente tenor:

“5.- Agréguese un literal k) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor:

Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente adulterada, modificada o falsa o utilice una placa patente que corresponda a otro vehículo”.

6.- Agréguese un literal L) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor:

“L) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas, que el número de chasis y/o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado, sea falso o no corresponde al declarado en el documento o se encuentre borrado.”.

7.- Agréguese un literal M) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor:

“M) “El que conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados, así como quien adultere o borre el el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor de un vehículo”.

8.- Elimínesse el numeral 6 de la propuesta.

9.- Reemplazar el numeral 8 de la propuesta por:

“8.- Agréguese un numeral 44 nuevo al artículo 200 del siguiente tenor:

Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, según correspondo. Dicha sanción también será aplicable al dueño del vehículo, y”.

10.- Reemplazar el numeral 9 de la propuesta por:

“9.- Agréguese un numeral 45 nuevo al artículo 200 del siguiente tenor:

“Vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, según corresponda”.

11.- Al numeral 10 de la propuesta para reemplazar la palabra “conducir” del inicio, por “Mantener”.

12.- Para agregar un artículo segundo al proyecto:

13.- Para Incorporar en el Artículo N°456 BIS, del Código Penal, un nuevo numeral tercero:

3) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente, con ella oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención con las normas del tránsito, o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramineta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad”.

INTERVENCIÓN SENADOR ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE
SESIÓN DEL MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

PRORROGAR LA VIGENCIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL DE EMERGENCIA, EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA,
Y LAS PROVINCIAS DE ARAUCO Y DEL BIOBÍO, DE LA REGIÓN DEL
BIOBÍO.

Muchas gracias, señor presidente y, por su intermedio, saludar a La **ministra del Interior, Carolina Tohá**; a la **ministra de Defensa, Maya Fernández**; y a la **ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte**, quienes nos acompañan hoy en este Senado de la República.

Hace casi un mes, el pasado 11 de octubre, al aprobar la octava renovación del Estado de excepción en la Macrozona Sur, la Ministra del Interior anunció que el Gobierno presentaría Indicaciones y/o un proyecto de ley para asegurar el “resguardo y protección” de los habitantes de la región de la Araucanía y las provincias de Bio Bio y Arauco, la cual tendría un rápido proceso de tramitación en este Congreso, al punto de afirmarse que se espera que aquella renovación, fuera la última que solicitara el gobierno a este congreso.

Vamos a cumplir casi un mes desde ese anuncio, y el gobierno aún no ha presentado el Proyecto de ley comprometido para asegurar la protección de la infraestructura, el despeje de vías y proteja a las

personas, sin que se afecten las libertades de las personas de la macrozona sur.

En la discusión de la renovación anterior, el pasado 25 de octubre, le solicitamos a la ministra, por su intermedio señor presidente, que aplicara sus máximos esfuerzos para cumplir los compromisos y plazos que ellos mismos se impusieron.

No es nuestra intención transformar la crisis de seguridad de la macrozona sur en un arma arrojadiza de la política de trinchera, pero necesitamos que el gobierno trabaje en este tema con sentido de urgencia, de manera de mejorar sustancialmente la presencia del Estado en las zonas afectadas y la persecución de los grupos terroristas que están presentes en este territorio.

En ese sentido, quisiera pedirle al gobierno, por su intermedio señor presidente, que concretara a la brevedad posible el envío, ya sea de una nueva figura jurídica, una reforma al estado de excepción existente o una indicación a un proyecto de ley que ya en discusión, lo que sea que el ejecutivo haya decidido hacer, pero que lo haga rápido.

Llevamos casi un mes esperando que el gobierno decida qué va hacer para reemplazar el Estado de Excepción en la macrozona sur, y aún no hay claridad sobre el camino que se tomará, mientras la

inseguridad y la incertidumbre continua devorando a miles de familias afectadas diariamente por el terrorismo que impera en la zona.

Para finalizar, al igual que el pasado 25 de octubre, vuelvo a quedar con la sensación de que en este tema no hemos avanzado, y en vez de 15 días, ahora hemos perdido casi un mes en avanzar en mejoras concretas para la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la Araucanía y las provincias de Bio Bio y Arauco.

Muchas gracias.

INTERVENCIÓN DEL SENADOR ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE

**PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA
PREVENIR LA VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y
SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA.**

Muchas gracias señor presidente.

Nuestro país está viviendo una crisis de seguridad que afecta transversalmente a toda la sociedad chilena y en todas las regiones. Cada uno de nosotros puede dar docenas de testimonios de cómo la inseguridad se ha tomado los territorios que representamos.

Uno de los hechos delictivos que más inseguridad causa, es el robo de autos en su modalidad de “portonazo”, el cual está afectando principalmente a sectores de clase media de las grandes ciudades de nuestro país.

De acuerdo a antecedentes entregados por la subsecretaría de prevención del delito en la discusión de este proyecto en la Comisión de Transportes, según los datos del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, desde el 4 de enero y hasta septiembre de 2022, se evidencia un aumento de 122,8% respecto a igual periodo del año 2021 en el delito de robo violento de vehículos.

Frente a esta problemática que afecta a todo Chile, es que un grupo de senadores, quien habla más los senadores Coloma, Castro González, Kusanovic y Walker, decidimos presentar un proyecto de ley que plantea 5 medidas concretas y de sentido común que permiten dar mayor seguridad a los dueños de vehículos y reduce la posibilidad de robo violento.

Es necesario hacer presente que estas medidas propuestas apuntan a atacar el mercado secundario informal de los vehículos robados, ya que este era uno de los principales incentivos económicos para que los delincuentes realicen robos violentos de vehículos, particularmente en la Región Metropolitana, donde se concentra el 81% de los robos violentos del país.

Las medidas propuestas por este proyecto de ley pueden ser resumidas de la siguiente forma:

1. Aumenta los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción del vehículo.
- 2.- Dispone la obligatoriedad de registrar o grabar en forma permanente e imborrable la placa patente única en los vidrios de los vehículos, estableciendo que los vendedores no podrán hacer entrega de los mismos si el grabado o impresión no se ha realizado.

- 3.- Sanciona a quien adquiere o solicite la inscripción del vehículo sabiendo, o no menos que sabiendo, que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado.
- 4.- Aumenta la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo, y
- 5.- Sanciona como delito conducir sin placa patente en los casos que ésta sea obligatoria.

Finalmente, quiero agradecer el amplio apoyo que estas propuestas tuvieron durante su discusión en la comisión de transportes, por parte no solo del ejecutivo, representado por el Ministerio de Transportes y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y de todos los partidos políticos, sino que también de instituciones como Carabineros, PDI, Fiscalía, asociación de asegurados, la asociación de concesionarios y la asociación nacional automotriz.

Solo me resta solicitar el apoyo de esta Sala del Senado, de manera que podamos seguir avanzando en estas nuevas normas y podamos darle más y mejores herramientas a la autoridades y ciudadanos para proteger sus bienes y enfrentar de mejor manera la crisis de seguridad que vive nuestra sociedad.

Voto a favor y muchas gracias.

INTERVENCIÓN SENADOR ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE
PL QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE
MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN
ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN
ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN
Y REINSERCIÓN SOCIAL

Muchas gracias señor presidente.

Hoy nos corresponde votar este proyecto que permitirá mejorar la persecución del narcotráfico, regula el destino de los bienes incautados, o comiso, y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Esta iniciativa surge de diversas iniciativas presentadas en los últimos años y que fueron refundidas, ya que todas ellas buscaban mejorar el combate al narcotráfico y el crimen organizado, mediante la creación de una nueva figura delictual; el perfeccionamiento de diversos tipos penales; el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

De esta forma,

- Se crean las figuras de la Enajenación temprana y comiso por equivalencia;

- Se amplían las personas naturales y jurídicas sobre las cuales la Unida de Análisis Financiero deberá informar operaciones sospechosas;
- Se incorpora un de nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento;
- Se eliminan de los conceptos de calidad y pureza.
- Se aumenta las penas para quienes utilicen a menores de edad en delitos;
- y se fortalece el trabajo del SENDA, entre otras modificaciones.

Pero más que detallar en profundidad los avances y aportes que este proyecto de ley incorpora a la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, los cuales ya han sido detallados en reiteradas oportunidades por mis colegas que me antecedieron, quiero mencionar algunos temas que están en este proyecto de ley y que generaron cierta controversia en su discusión en la comisión de seguridad.

El primero tiene relación con el cambio del artículo N°8 de la ley N°20.000, el cual tiene relación con la autorización para el autocultivo de cannabis bajo prescripción médica.

Esta indicación fue aprobada 3x2 en la comisión con los votos en contra de los senadores Kast y Moreira, quienes hicieron ver que esta indicación estaba fuera de la idea matriz del proyecto.

De la misma forma, es necesario señalar que si lo que se quiere es legislar sobre el uso de la marihuana medicinal, debate que es del todo válido en una sociedad democrática como la nuestra, este se debe analizar en un proyecto de ley particular por la Comisión de salud y no la de seguridad pública, ya que tiene una directa relación con los temas sanitarios y donde es indispensable escuchar la opinión de instituciones expertas en área, como el Instituto de Salud Pública, quienes es el encargado de certificar y registrar el uso medicinal de toda sustancia.

De hecho, existe en este Senado el proyecto de ley que modifica el código sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de la cannabis, Boletín N°11.327-11, en segundo trámite constitucional, con informe de la comisión de salud y a la espera de ser votado en general por esta sala.

Considero que es en este proyecto de ley donde se debiera dar el debate democrático sobre este tema y no en una iniciativa de seguridad pública que busca perseguir el narcotráfico.

Solo para finalizar, recordar que en la discusión en la comisión de salud del proyecto antes mencionado, el Colegio Médico en julio de 2019, bajo la presidencia de la ex Ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches y siendo miembro de su directiva el actual subsecretario de salud, Cristóbal cuadrado, estableció no estar de

acuerdo con el proyecto de ley de marihuana medicinal, al no otorgar los resguardos necesarios para un tratamiento adecuado y seguro basado en la evidencia.

El segundo punto de controversia de este proyecto de ley tiene relación con el Artículo N°8 BIS, que en la práctica se está autorizando el consumo personal, permitiendo el cultivo in-door de una cantidad máxima anual.

Respecto de esta nueva norma, es necesario señalar que la cantidad máxima que una persona puede cultivar es anual, lo que hace practicable su fiscalización, ya que Carabineros no podrá estar visitando semanalmente las viviendas de las personas para determinar cuántos gramos se han cosechado de cannabis y si se cumple con la cuota anual.

De la misma forma, es necesario tener presente que, en la discusión de este artículo en la comisión de seguridad, Carabineros señaló que el cultivo in-door es el modo de cultivo que más se incauta actualmente en Chile, siendo una de las principales fuentes de cannabis para el tráfico y narcotráfico en el país.

En otras palabras, con este artículo caemos en el contrasentido de que por una parte estamos mejorando la persecución del narcotráfico y por otra, estamos autorizando e implementando el método de mayor producción de cannabis que utilizan los traficantes en nuestro país.

Finalmente, es necesario hacer presente a esta sala, que esta misma indicación fue presentada en la discusión de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en donde fue declarada inadmisibile por la comisión de seguridad, con votos de sectores de izquierda.

Por todo lo anterior, señor presidente, es que quiero pedir desde ya la votación de la admisibilidad de los artículos N°8 y N°8 Bis de esta iniciativa, ya que tenemos la convicción de que ambos se alejan de la idea matriz del proyecto.

Muchas gracias.

INTERVENCIÓN SENADOR ENRIQUE VAN RYSELBERGHE
SESIÓN DE OCTUBRE DE 2022

PROYECTO DE LEY SOBRE PUBLICIDAD DE LAS SESIONES DE LOS
CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES.

Muchas gracias, señor presidente.

En mi calidad de autor de una de las mociones que dan origen a este proyecto de ley, quiero partir agradeciendo el trabajo de los senadores miembros de la comisión de Gobierno, descentralización y regionalización, y particularmente a su presidenta, la senadora Luz Ebensperger, por su rápido y expedito estudio y análisis de este proyecto de ley.

Debo reconocer que esta moción nació de una sugerencia que recibí por parte de los dirigentes de la Unión Comunal de Mulchén, en la provincia de Bio Bio

Sin embargo, pese a su rápido y expedito esta iniciativa no estuvo ausente de una profunda y consciente reflexión por parte de los parlamentarios de ambas cámaras, razón por la cual se le introdujeron una serie de mejoras que permitirán profundizar nuestra democracia a nivel regional y comunal y asegurar una mejor transparencia de los órganos colegiados que en ellas funcionan.

Durante la pandemia, la gran mayoría de los municipios y gobierno regionales implementaron sistema de transmisión on-line de sus sesiones, pero estuvieron vigentes mientras duró la cuarentena y, lo más importante, no quedaba el registro disponible para su posterior revisión. Es decir, solo se podía ver en vivo.

Dentro de la discusión en particular de este proyecto, la SUBDERE se comprometió a apoyar financieramente a aquellos municipios más pequeños o que no cuenten con los recursos para cumplir con esta nueva norma. Esperamos que la subsecretaría no se olvide de este compromiso y pueda apoyar a los aquellos municipios más pequeños, y generalmente con altos niveles de ruralidad, en la difusión y transparencia ante la comunidad de su funcionamiento.

Muchas gracias.

INTERVENCIÓN DEL SENADOR ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL PARA REESTABLECER EL VOTO OBLIGATORIO EN LAS ELECCIONES POPULARES

Muchas gracias señor presidente.

Hoy nos corresponde votar un proyecto de ley que desde el pasado 04 de septiembre, tomó una vigencia insospechada, así como una urgencia y apoyo transversal que resultaba impensado antes del plebiscito constitucional de salida.

Me refiero al proyecto de ley que modifica la Constitución Política de la República para reestablecer el voto obligatorio en las elecciones populares, cuyo objetivo es claro y puntual: cambiar la regulación para que todas las votaciones pasen a ser obligatorias, tal como fue antes de 2009, cuando este mismo Congreso Nacional decidió instaurar el voto voluntario.

El debate sobre la voluntariedad u obligatoriedad del voto ha acompañado toda la historia política nacional. Hemos transitado por varios sistemas, llegando a ser obligatorio a mediados del siglo pasado. Posteriormente, entre 2009 y 2012, se materializaron importantes reformas, que consagraron la voluntariedad del voto, la inscripción automática, y eliminaron las sanciones asociadas a no sufragar.

Sin embargo, para los autores de esta moción, que fue presentada antes del plebiscito Constitucional de salida del pasado 04 de septiembre, un factor que ha incidido en la baja en la participación los últimos años ha sido la voluntariedad del voto.

Argumentan que el hecho de ser obligatorio lo eleva de manera más clara como deber cívico, que contribuiría a que los grupos más “moderados” vayan a votar, y que otorgaría mayor legitimidad democrática a las autoridades electas

Estas ideas contradicen de forma directa a los principales argumentos que, a partir del año 2009, utilizaron diversos parlamentarios para apoyar la idea del voto voluntario:

- Primero, el respeto de la libertad de participar o no en los procesos políticos electorales.
- El voto voluntario obligaría a los políticos -y autoridades en general- a convencer a los ciudadanos de participar, puesto que no están obligados a hacerlo.

Sin embargo, y luego de más de 10 años de vigencia del voto voluntario, hoy podemos decir que vivimos en un país libre gracias a una democracia fuerte y que el voto voluntario solo la debilita al plantear el voto como algo opcional y sin peso al carecer de sanciones.

Luego de 10 años de voto voluntario, se ha llegado al consenso transversal de que la preocupación por elegir a nuestras autoridades no es solo un derecho sino un deber ciudadano que debe ser ejercido.

De esa forma, el ámbito de la libertad en el contexto de los deberes cívicos se traduce en la posibilidad de elegir una opción política e incluso, el optar por anular el voto, pero en ningún caso se debe traducir esa libertad en la existencia de la opción de que el ciudadano puede ejercer el voto o no.

Como conclusión, el regreso del voto obligatorio forzará a quienes sean candidatos a un cargo de elección popular a dejar de buscar apoyos mínimos para salir electos y a hablar a los fanáticos de sus ideas, y les impondrá la tarea, y el deber, de tener que socializar y difundir sus ideas y propuestas al mayor número de ciudadanos posible, lo que, entre otras cosas, moderará el debate político electoral y le devolverá la sensatez y lucidez que los chilenos reclaman desde hace bastante tiempo.

Por todo lo anterior, voto a favor señor presidente.

Muchas gracias.

MINUTA INDICACIÓN PRESUPUESTO
SENADOR ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE

A.- INDICACIÓN PRESENTADA A LA PARTIDA 31, DE GOBIERNO REGIONALES

OBJETIVO: Permitir que el Gobierno Regional del Bio Bio puede financiar, con recursos propios del GORE, la compra de terrenos y otras iniciativas de inversión en tres comunas de la Provincia de Concepción (Santa Juana, Florida y Hualqui).

INDICACIÓN: A la Partida 31 (gobierno Regionales), capítulo 01, glosa 02, subtítulo 33, Item 03, asignación 08, literal 4, parque quede del siguiente tenor:

*“4. Gobierno Regional del Biobío Incluye recursos para la adquisición de activos no financieros, para la compra y adquisición de terrenos e inmuebles, y para la ejecución de programas e iniciativas de inversión en las Provincias de Arauco y de Biobío, **y las comunas de Santa Juana, Florida y Hualqui de la Provincia de Concepción**, nuevos y de arrastres, postuladas por cada una de sus Municipalidades, los que deberán estar en línea con la estrategia de desarrollo. Con todo, hasta un 40 % de estos recursos podrán ser aplicados al financiamiento de proyectos FRIL, PMB o PMU, los cuales también deberán estar alineados con la estrategia mencionada”.*

INTERVENCIÓN: Muchas gracias señor presidente.

En esta partida presenté una indicación para permitir que el Gobierno Regional del Bio Bio comprara terrenos en comunas de la provincia de Concepción, que no estaban declaradas como zona de rezago. Esta indicación fue declara

inadmisible, pero se me ha asegurado que en la partida 31 (Gobierno Regionales) en la glosa 2 se incluyó el siguiente numeral:

“Los Gobiernos Regionales podrán adquirir terrenos, para constituir o aperturar vías o calles en sectores urbanos y rurales, y a la ejecución de infraestructura de interés regional, en materias de agua potable, saneamiento sanitario, salud, educación, vivienda, entre otros.”

Entonces, solo quiero confirmar con el ejecutivo, por su intermedio señor presidente, si con esta nuevo numeral los gobiernos regionales podrán comprar terrenos, principalmente para temas habitaciones, sin tener que cumplir otros requisitos.

Muchas gracias.

B.- INDICACIÓN PRESENTADA A LA PARTIDA 10, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DD.HH.

OBJETIVO: Dejar consignado en el presupuesto 2023, mediante una glosa nueva de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el deber de que el Ejecutivo se comprometa a enviar un proyecto de ley, antes del 31 de marzo del 2023, para crear una Ley de Reparación de Víctimas de la Violencia Rural y del Terrorismo en el sur de Chile.

INDICACIÓN: A la partida 10 (ministerio de justicia y derechos humanos), capítulo 06 (subsecretaría de derechos humanos), programa 01, glosa 04, subtítulo 24, ítem 03, asignación 001, denominado “PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS”, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“A más tardar el 31 de marzo del año 2023, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado, sobre las líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos generales para reparar justamente a las víctimas de la violencia rural y el terrorismo en las regiones del sur de Chile, considerando avances en materia legislativa, la creación de un catastro histórico de víctimas y el reconocimiento la responsabilidad que tiene el Estado en esta materia”.

INTERVENCIÓN:

Muchas gracias señor presidente.

Esta indicación busca dejar consignado en el presupuesto 2023, mediante una glosa nueva de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el deber de que el Ejecutivo se comprometa a enviar un proyecto de ley, antes del 31 de marzo del 2023, para crear una Ley de Reparación de Víctimas de la Violencia Rural y del Terrorismo en el sur de Chile.

Esta fórmula ha sido probada en otras oportunidades, siendo la primera cuando se le exigió al presidente Piñera enviar un proyecto de ley para ampliar el Post Natal, en su primer mandato. Posteriormente, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo lo mismo para legislar la desmunicipalización de la educación pública. Además, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de estas indicaciones que obligan a cumplir, como si fuese una norma legal.

Finalmente, el actual ejecutivo se ha comprometido para implementar a la brevedad posible una política de reparación a las víctimas de la violencia rural, por lo que es de toda lógica que este compromiso del gobierno quede registrado en la ley de presupuesto 2023.

Espero contar con el apoyo de los demás senadores. Muchas gracias.

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N°18.290, DE TRÁNSITO, PARA SUPRIMIR LA EXCEPCIÓN A LA EXIGENCIA DE PATENTE ÚNICA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS EN CHILE.

BOLETÍN N°: 15.016-15

FECHA DE INGRESO: 25 de mayo de 2022.-

CÁMARA DE ORIGEN: Cámara de diputados.

ETAPA: Segundo trámite constitucional (Senado).

URGENCIA ACTUAL: Suma urgencia.

AUTORES: Ejecutivo.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Modificar el régimen de excepciones a la prohibición general de circulación sin patente de vehículo, eliminando la excepción que habilita a los vehículos nuevos, internados al país o adquiridos en una empresa importadora o comercializadora, a circular durante 5 días con el comprobante contable de la adquisición.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO:

- En Chile es obligatorio el uso de patente en para su circular, tal como señala el artículo 51 de la Ley de Tránsito. El no portar la placa en el vehículo, salvo que se encuentre en una situación que así lo justifique, es una falta grave que amerita incluso el término de la circulación del vehículo y su comiso transitorio para su depósito en “corrales”.
- El art. N° 54 de la Ley de Tránsito detalla los supuestos que permiten la circulación de un vehículo sin patente, pero luego se encuentra también la situación de la denominada “patente provisoria” o “duplicada”, que se requiere cuando la original se inutiliza o extravía. En dicho supuesto la solicitud de patente hecha ante el Servicio de Registro Civil sirve de patente, pero no es un elemento a la vista como la original que permite ser fiscalizada por medios como cámaras.
- Por lo anterior, se cree oportuno modificar el régimen de excepciones a la prohibición general de circulación sin patente de vehículo, eliminando la excepción que habilita a los vehículos nuevos, internados al país o adquiridos en una empresa importadora o comercializadora, a circular durante 5 días con el comprobante contable de la adquisición.

INDICACIÓN SUSTITUTIVA DEL EJECUTIVO:

- El 12 de septiembre de 2022, el ejecutivo presentó una indicación sustitutiva al proyecto original, de manera de mejorar y completar el objetivo del proyecto de ley en diversos artículos de la ley de tránsito.
- Se mantiene la modificación al art. 54 N°3 de la Ley de Tránsito, que permite que los vehículos nuevos internados al país o adquiridos en una firma importadora puedan transitar por la vía pública sin PPU por un tiempo no superior a cinco días, siempre con la factura de compra del vehículo y para el sólo efecto de obtener la patente única y el permiso de circulación.
- Se hace la excepción de esta norma sólo a los vehículos con peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kg nuevos que deben desplazarse por sus propios medios y sólo para efectos de traslado al concesionario.
- Su suma la obligación de los comercializadores, entendiéndose como tales a quienes entregan físicamente el vehículo al adquirente, de entregar los vehículos con su solicitud de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación y con la PPU instalada. Lo anterior, con la contrapartida que quienes incumplan con tal obligación serán sancionados con una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales.
- Se propone aumentar la sanción para los conductores que guíen vehículos sin PPU. Así, la sanción que actualmente es calificada como grave pasa a ser calificada como gravísima, lo que implica aumentar las multas asociadas y, eventualmente, aplicar las demás sanciones definidas para esta calificación, tal como la suspensión de la licencia de conducir dispuesta en el art. 207 de la Ley de Tránsito.
- Finalmente, se establece un periodo de gracia de doce meses a fin de que las motocicletas adquiridas en el país obtengan la revisión técnica y el proceso de homologación para puedan contar con la PPU. Cumplido este plazo, las motocicletas que no cuenten con su PPU, serán sancionadas según las reglas generales establecidas en la Ley del Tránsito.

COMENTARIOS AL PROYECTO:

- Desde el estallido social se ha podido observar un aumento exponencialmente del número de vehículos motorizados que circulan sin patentes por calles y autopistas.
- La asociación de autopistas concesionadas, señalaron que en Santiago circulan un promedio diario de 15 mil vehículos sin patentes o con patente oculta.

- Según estimaciones de carabineros, el 50% de los vehículos que actualmente circulan sin patente por las calles del país, están relacionados a algún tipo de delito. (Portonazo, robo con fuerza, narcotráfico, etc.)
- De acuerdo a datos entregados por carabineros de Chile, al 31 de agosto de este año se han cometido 384 delitos o faltas que involucran vehículos sin placa patente, misma cifra cometida como total en el 2020.
- Al igual que en la discusión de la Ley CATI, no se puede observar un argumento convincente para que en el caso de las motocicletas se dé un plazo de 12 meses para regularizar una situación que ya está regulada y sancionada, por lo que no tiene sentido dar este plazo de gracia.

MINUTA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

1.- Proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad.

BOLETÍN N°: 13657-07 Y 14015-25, refundidos.

FECHA DE INGRESO: Martes 21 de junio de 2020

CÁMARA DE ORIGEN: Senado

ETAPA: Primer trámite constitucional (Senado), discusión en particular.

URGENCIA ACTUAL: Sin urgencia

AUTORES: Senadores Aravena, Chahuán, García y Pugh (Boletín N°13657-07) Senadores Sabat, von Baer y Kast (Boletín N°14015-25)

OBJETIVO DEL PROYECTO:

- Por una parte, diferenciar las distintas hipótesis de usurpación y ocupación de inmuebles, para, de esta manera, modificar la limitada sanción dispuesta en la ley a su respecto.
- Por otra, garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de esta clase de hechos mediante una sanción eficaz, confiriéndole carácter delictivo a la respectiva conducta, para lo cual se elimina el límite a la flagrancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, a fin de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

- Los autores hacen presente que la propiedad es uno de los bienes jurídicos más resguardados por el ordenamiento nacional, que la custodia constitucionalmente mediante el recurso de protección y sanciona los daños que se le causan y su pérdida.
- Sin embargo, una situación anómala es la regulación que se contempla en el Código Penal respecto del **delito de usurpación**, que, no obstante considerar como hecho base la fuerza en las cosas o la apropiación violenta de una cosa o de un derecho real, le fija una baja penalidad (multa desde 11 a 20 UTM), que no guarda relación con el resto de la normativa sobre la propiedad y genera disparidad entre la protección general que se le otorga y la sanción aparejada a este delito.

- Esta débil sanción podría explicarse por una proporcionalidad intuitiva de este delito en comparación con el robo y el hurto (ilícitos en los que el hechor puede huir con la especie sustraída y hacer difícil o imposible su ubicación y recuperación). En el caso de un inmueble no se puede dar la misma hipótesis, pues la recuperación del bien usurpado se logra por la expulsión de usurpador. Sin embargo, el motivo principal de las penas bajas radica en que la propiedad nunca se pierde, pues el sistema registral la custodia.

- La usurpación, al estar sancionada como una falta, implica un problema práctico relativo a que para el desalojo de los infractores Carabineros tiene que atender a lo establecido en el Art. 124 del Código Procesal Penal: **cuando el ilícito es una falta o un delito que la ley no sanciona con penas privativas ni restrictivas de libertad no se pueden ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado**, con excepción de la citación. Esto significa que lo único que puede hacer Carabineros es sacar de los deslindes del sitio en cuestión a los infractores. Lo que en la práctica ocurre es que, una vez retirado el contingente, los infractores vuelven a instalarse en el predio defendido.

- A ello se suma un problema normativo de importancia: **después de doce horas ya no hay flagrancia y el afectado debe recurrir a la justicia civil ordinaria**. Para la usurpación este plazo es excesivamente corto, pues el tiempo que pasa entre que los dueños se den cuenta y Carabineros pueda llegar al lugar es superior. Si bien la flagrancia existe mientras se están cometiendo los delitos, es necesario dejar normativamente establecido que en este tipo de delitos no existará el límite de tiempo asignado por la Corte Suprema.

- Se debe distinguir entre dos tipos de usurpación: **la ocupación por extrema necesidad**, de la cual derivan asentamientos irregulares tales como tomas o campamentos, de aquella que se realiza con fines distintos, **como la comercialización ilegal de predios ajenos**, conocidos como **“loteos brujos”**, esto es, aquella práctica por la cual una persona o un grupo de personas ocupa un predio ajeno, sea estatal o privado, con la finalidad de comercializarlo, creando lotes irregulares que luego son vendidos.

- El loteo brujo es una modalidad extendida en grandes ciudades latinoamericanas (Bogotá, Ciudad de México, Río de Janeiro), y contribuye a aumentar la informalidad habitacional y sirve de fuente de financiamiento para organizaciones criminales. En Chile se ha visto un incremento de esta práctica: un estudio de Atisba Monitor, publicado en julio de 2020, muestra que, en grandes centros urbanos del país, tales como Santiago y Valparaíso, ha existido una proliferación de ocupaciones con fines comerciales en los últimos años.

- Esta iniciativa se enfoca en aquellos grupos organizados que buscan lucrar ilícitamente mediante la usurpación de terreno ajeno y la estafa a los compradores, quienes por esta transacción no se hacen dueños del predio.

- Este delito tiene muy poca aplicación, sea porque es difícil dar por establecida la existencia del mismo y la participación criminal, como porque, en los casos en que eventualmente se llega a dar por configurado, las penas que trae aparejado son mínimas. En la práctica, las

ocupaciones, violentas o no, carecen de sanción y las víctimas sienten impotencia frente a la reiterada impunidad.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO.

- La Moción del Boletín Nº 13.657-07, consta de un artículo único que, mediante tres numerales, modifica el inciso primero del artículo 457 del Código Penal, que establece la pena de presidio menor en su grado medio a el que ocupe con violencia en las personas una cosa inmueble con ánimo de apropiarse de ella.

- Además, sanciona con multa de 20 a 40 UTM a quien usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente. Con la misma multa sanciona al que, una vez hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, lo repeliere.

- Finalmente, aumenta de 11 a 20 UTM la multa tratándose de la hipótesis de usurpación sin violencia.

- La Moción signada con el Boletín Nº 14.015-25, se compone de dos artículos que modifican el Código Penal y el Código Procesal Penal, en el siguiente sentido:

a) Considera delito a la usurpación, estableciendo para aquella violenta una sanción base de presidio menor en su grado mínimo, independiente de la pena que correspondieren por la violencia que se causare.

b) Agrega al concepto del artículo 457 del Código Penal la frase “aunque sea parcial y transitoriamente”, para permitir la persecución de quienes usurpan terrenos sin tener que probar el “ánimo de permanencia” o aunque no lo hagan en la totalidad del terreno de la víctima.

c) Añade al artículo 21 del Código Penal, a propósito de los simples delitos, la nueva pena de “prestación de servicios en beneficio de la comunidad”.

d) Ajusta mediante un artículo 49 bis, nuevo, el caso en que el tribunal revoca la sanción, por vía de sustitución y apremio, con una pena de reclusión única que se regulará en un día por cada ocho horas de servicios pendientes.

e) Impide, en el inciso final propuesto al artículo 49 ter, cumplir la pena mediante pago de multa.

f) En relación con la usurpación no violenta, reemplaza la pena establecida en el artículo 458 por la nueva sanción incorporada en el artículo 21 de servicios en beneficio de la comunidad, por un período de entre 60 y 90 días.

g) Extiende la flagrancia, incorporando un nuevo artículo 458 bis, que establece el carácter permanente del delito desde que principia su ejecución y mientras persista su ocupación, operando la flagrancia durante todo este lapso.

h) Contempla la pena correspondiente a la hipótesis violenta para quien se valga de un menor de edad en la comisión de este ilícito, independientemente de que el acto del menor tenga o no mérito punible, y contare o no con su consentimiento.

i) Incorpora un nuevo artículo 462 bis para incluir el párrafo de las usurpaciones dentro de las hipótesis del artículo 449, que declaran inaplicables las atenuantes.

j) Modifica el Código Procesal Penal para permitir la detención de los infractores en todos los casos, exceptuados los simples delitos que tengan asociadas una pena única de multa.

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO:

- El proyecto de ley fue ingresado el 21 de julio de 2020 en el Senado de la República.

- El 02 de marzo de 2020, la sala del senado decide refundirlo con otra iniciativa (Boletín N°13.657-07)

- El 01 de septiembre el proyecto es despachado por la Comisión de Seguridad Pública.

- Entre los meses de octubre y diciembre de 2021, el proyecto es discutido en tres oportunidades en la sala del Senado, sin ser votado.

- El 12 de abril de 2022 la sala del senado acuerda pedir un nuevo primer informe de la Comisión de Seguridad, de manera de que el nuevo gobierno pueda intervenir en la discusión del proyecto.

- El 02 de junio la Comisión de Seguridad remite a la sala su nuevo primer informe.

- El 09 de agosto de 2022 la sala aprueba en general el proyecto y se abre un plazo de indicaciones hasta el 24 del mismo mes.

- El proyecto se encuentra hasta hoy a la espera de ser puesto en tabla de la comisión de Seguridad (atribución del presidente de la comisión) para que las indicaciones sean votadas.

MINUTA
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA PREVENIR LA VENTA DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA.

BOLETÍN N°: 15.077-15 y N°15.410-15, refundidos.

FECHA DE INGRESO: 13 de junio de 2022.

CÁMARA DE ORIGEN: Senado

ETAPA: Primer trámite constitucional (Senado), discusión en general.

URGENCIA ACTUAL: Sin urgencia

AUTORES: Senadores Coloma, Castro González, Kusanovic, van Rysselberghe y Walker; y senadores Insulza, Elizalde y Órdenes.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

1. Aumenta los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción del vehículo.
- 2.- Dispone la obligatoriedad de registrar o grabar en forma permanente e imborrable la placa patente única en los vidrios de los vehículos, estableciendo que los vendedores no podrán hacer entrega de los mismos si el grabado o impresión no se ha realizado.
- 3.- Sanciona a quien adquiera o solicite la inscripción del vehículo sabiendo, o no menos que sabiendo, que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado.
- 4.- Aumenta la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo.
- 5.- Sanciona como delito conducir sin placa patente en los casos que ésta sea obligatoria.

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO:

- El proyecto fue presentado el lunes 13 de junio de 2022.
- El 11 de octubre la sala acuerda refundirlo con una moción presentada por los senadores Insulza, Elizalde y Órdenes que busca la obligatoriedad de grabar las placas patentes en los vidrios de los vehículos.
- El 25 de octubre la comisión de transportes y Telecomunicaciones aprueba en general el proyecto por unanimidad. (3x0)

ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

- El PL busca establecer una serie de medidas para prevenir la compraventa de vehículos robados. La idea es atacar a la demanda de vehículos robados, lo que ayudaría a disminuir sustancialmente este tipo de delito.
- El robo de vehículos tiene como objetivo: la comisión de otros delitos; la clonación; y la venta de estos por partes o piezas.
- La Asociación de Aseguradores de Chile señaló en abril de 2022, que en el último mes se habían reportado un total de 1.000 robos de vehículos con violencia, de acuerdo a los datos publicados por Carabineros, lo que implicaba un aumento de 171% en comparación al mismo periodo del año anterior.
- Si se compara el primer semestre de 2022 con igual periodo del año anterior, se evidencia que los robos de vehículos aumentaron un 55% y que el robo violento en un 65%.
- Según los antecedentes entregados por la subsecretaría de prevención del delito, de acuerdo con el sistema STOP de Carabineros, desde el 4 de enero y hasta septiembre de 2022, se evidencia un aumento de 122,8% respecto a igual periodo del año 2021.

COMENTARIOS AL PROYECTO:

- La iniciativa cuenta con un amplio respaldo de los senadores de la comisión, así como de diversos expositores, (Ministerio de transportes, policías, asociación de aseguradores, fiscalía, subsecretaría de prevención del delito, asociación nacional automotriz, etc.)
- Todos ellos plantearon que las medidas propuestas eran correctas y sugirieron una serie de modificaciones de redacción y de posibles nuevos incisos para hacer más efectiva su aplicación.
- De igual forma, hubo consenso en que era necesario atacar el mercado secundario informal de los vehículos robados, ya que este era uno de los principales incentivos económicos para que los delincuentes realizaran robos violentos de vehículos, particularmente en la Región Metropolitana, donde se concentra el 81% de los robos violentos del país.
- Solo el SII se mostró en desacuerdo con el PL, particularmente con el aumento de los requisitos para las facturas, argumentando que estos requisitos estaban definidos por un decreto supremo del Ministerio de Hacienda y que la incorporación de nuevos antecedentes al sistema de datos del SII implicaría un mayor gasto fiscal, por lo que el proyecto de ley necesitaría patrocinio del ejecutivo para continuar su tramitación.
- Se recomienda probar la iniciativa y presentar indicaciones a las mismas en base a las sugerencias de los expositores, de manera de mejorar la aplicación de las normas propuestas.

Valparaíso, 02 de noviembre de 2022.-

Nº: 016/2022.-

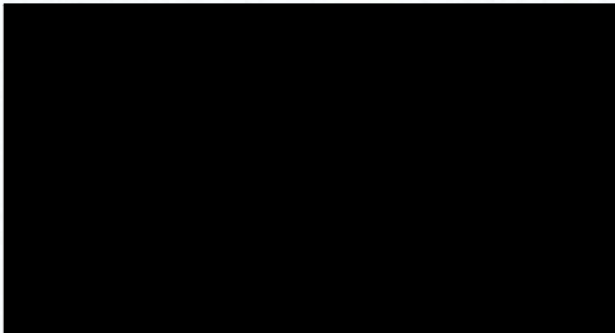
Ref.: Solicitud de oficio individualizado.

**SENADOR
ÁLVARO ELIZALDE SOTO
PRESIDENTE DEL SENADO
PRESENTE**

De mi consideración:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, vengo a solicitar a usted remitir a quien corresponda, el siguiente oficio a continuación individualizado.

Sin otro particular y agradeciendo desde ya su pronta gestión, se despide atte,



ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
REGIÓN DEL BÍO BÍO

1.- A la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales, con el objeto de que tenga a bien responder a la brevedad posible el Oficio N°19.880 de dirección jurídica de la Contraloría General de la República (REF: 160.776-22), del 26 de septiembre de 2022, con relación a la solicitud de información sobre el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a los miembros de la a Agrupación de ex Trabajadores de ENACAR-Lota.

ARTICULADO APROBADO DEL PROYECTO DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 1º.- *El Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana*¹, en adelante también “el Ministerio”, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias.

Asimismo, le corresponde planificar, diseñar, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas relativos, tanto a dichas materias, como a aquellas que digan relación con reinserción social, rehabilitación, así como en atención y asistencia a víctimas, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a otros organismos, de conformidad a la ley.

El Ministerio actuará en conformidad con los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación, en el marco de sus funciones y atribuciones, y fomentará la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores.

Artículo 2º.- El Ministerio coordinará y articulará un sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana, integrado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el Ministerio Público; *el Poder Judicial (2)*; y el conjunto de entidades públicas, a nivel nacional, regional y comunal, cuyas funciones se relacionen con los objetivos y materias señaladas en el artículo anterior. Dicho sistema comprenderá las normas, políticas, planes y otros instrumentos relativos a estos mismos ámbitos.

El funcionamiento del sistema se regirá por un reglamento, el cual podrá crear subsistemas y determinar que participen otras instituciones u órganos de los señalados en el artículo 1º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Artículo 3º.- Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros y la Policía de Investigaciones, en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, dependerán del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, encontrándose subordinadas al poder civil, en conformidad a la Constitución y las leyes.

La dependencia referida será sin perjuicio de las órdenes que reciban las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio Público, en el contexto de una investigación penal; así como de la supervisión que ejerza la Subsecretaría del Interior, respecto de sus funciones en materia migratoria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 21.325.

¹ pendiente del acuerdo de la Comisión respecto al nombre del Ministerio.

² .- La comisión acordó oficiar a la Corte Suprema para conocer su posición sobre su incorporación a este sistema de seguridad.

Artículo 4°.- El Ministro o la Ministra de ***Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana(1)*** deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, protección de las personas, orden público, prevención del delito, convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas, rehabilitación y reinserción social, así como las demás funciones y atribuciones del Ministerio.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas en dichos ámbitos. Además, cuando se trate de la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos, se podrá pronunciar, en las materias de su competencia, sobre su seguimiento e implementación.

Para el logro de estos objetivos, podrá solicitar todos los antecedentes que estime pertinentes a cualquier órgano de la Administración Pública, quienes estarán obligados a entregar aquellos que se encuentren en su poder.

Artículo 5°.- Corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana las siguientes funciones:

- a. Garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito.
- b. Promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad, mediante la adopción de medidas tendientes a la solución pacífica de los conflictos, la prevención de delitos y el fortalecimiento del diálogo intercultural y comunitario.
- c. Promover medidas tendientes a prevenir delitos, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, evaluando continuamente, bajo criterios técnicos y especializados, las acciones y políticas públicas para el logro de los objetivos en la materia.
- d. Velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales, para el logro de los objetivos.
- e. Ejecutar las acciones para prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, así como las conductas terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

- f. Ejecutar, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las acciones tendientes a resguardar las fronteras de nuestro país para evitar la comisión de delitos, de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas, así como cualquier otra afectación de la seguridad y el orden público, en coordinación con los demás organismos competentes en la materia.
- g. Adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital, servicios esenciales e infraestructura crítica de la información, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia.
- h. Adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público, mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales, en coordinación con los organismos con competencias en la materia.
- i. Adoptar y ejecutar medidas tendientes a supervigilar que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyuvante de la seguridad pública.
- j. Cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones.
- k. Controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos.
- l. Ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

Artículo 6°.- Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones:

- a. Proponer al Presidente o Presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación.
- b. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República, la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.
- c. Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las acciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.
- d. Elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y

evaluarla periódicamente.

- e. Entregar lineamientos generales y específicos, en los ámbitos estratégico, táctico y operativo, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para el resguardo de la seguridad y orden público, **evitando un abuso excesivo de la fuerza**, en coherencia con los planes Estratégico de Desarrollo Policial y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa.

- f. Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos, en el ámbito de su competencia.

En el ejercicio de esta atribución, deberá considerar, especialmente, la adopción de medidas tendientes a prevenir la comisión de delitos por parte de menores de edad, actuando siempre de conformidad al principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

- g. Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados, y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la ley N° 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

- h. Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública, en el marco de sus competencias.

- i. Desarrollar y administrar sistemas de tratamientos de datos, documentos y otros antecedentes, en el marco de sus competencias, que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

- j. Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, a lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, **podrán** considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, a nivel nacional, regional y comunal.

En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá, anualmente, publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, deberá estar segmentada por regiones, tipo de delito y otros criterios importantes.

Para estos efectos, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública enviarán al Ministerio mensualmente datos y estadísticas policiales a partir de las faltas y delitos conocidos por la institución, y de otros procedimientos realizados por la misma.

- k. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana, **protección de las personas** y las demás materias que

sean de su competencia.

- l. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materias relativas a su competencia.
- m. Establecer las acciones de coordinación destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer el orden público, en todo el territorio de la República.
- n. Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de rehabilitación, reinserción social, asistencia y atención a víctimas, convivencia ciudadana y protección de las personas.
- o. Solicitar informes a cualquier organismo público, en materias relacionadas directa o indirectamente a la mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público, y la prevención del delito; la atención y asistencia a víctimas; la reinserción social, la rehabilitación, la convivencia ciudadana y demás materias de su competencia. Dichos órganos de la Administración Pública estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder.
- p. Autorizar, regular, supervigilar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.
- q. Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, en materias de su competencia.
- r. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

En ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrá entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la ley N° 19.640, el Código Procesal Penal y las demás leyes especiales.

Artículo 7°. - Al Ministerio le corresponderá respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las siguientes atribuciones:

- a. Asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación de los Altos Mandos, de la misma manera que con los ascensos y retiros del personal de nombramiento supremo y oficiales policiales de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
- b. Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y sus modificaciones, y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, de conformidad a la ley.
- c. Supervigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad pública que defina el ministerio, mediante el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial contemplado en la ley N°

21.427.

- d. Promover el cumplimiento de las normas de probidad, transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas a la ciudadanía por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
- e. Ejercer el control presupuestario, financiero y **de mérito respecto de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública**, de acuerdo a la normativa vigente y sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán hacer envío, trimestralmente de su estado y gestión financiera, vía interconexión. Sin perjuicio de ello, el Ministerio podrá requerir información estadística actualizada o exigir el complemento de las ya enviadas, en cualquier momento, debiendo ser remitidas por esa misma vía.

Es similar al punto anterior, en el sentido de que el “mérito” de las inversiones y gastos realizados por las Fuerzas de orden tiene que ver con aspectos técnicos propios de sus funciones.

En ese sentido, el Ministerio podrá controlar la parte administrativa y financiera de esas compras o gastos, pero no entrar a definir si son técnicamente adecuadas o no.

- f. Examinar y aprobar las bases de licitación o requerimientos para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio determinará los requerimientos técnicos para la adquisición de equipos y programas computacionales, a fin de compatibilizar las herramientas tecnológicas que utilicen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, podrá solicitar la opinión de otras instituciones que estime relevante.

- g. Diseñar, junto a los Altos Mandos, estrategias educativas, de capacitación y perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
- h. **Dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública**, en coordinación con la elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con especial enfoque en el adecuado uso de la fuerza, la incorporación de una perspectiva de género, de resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de no discriminación, así como en la promoción, garantía y respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

El ministerio podrá sugerir o supervisar, pero las orientaciones técnicas de los planes de formación y capacitación responden a planes y objetivos propios de la profesión, por lo que un ente político no debería tener la facultad de definirlos.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá coordinar con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como con la Subsecretaría de Educación Superior, quienes emitirán un informe previo, pronunciándose sobre las orientaciones técnicas referidas.

- i. Aprobar los planes y programas de estudio, así como la capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, **los perfiles de ingreso y egreso y el cuerpo docente de los planteles de las instituciones antes mencionadas**, para lo cual solicitará, en su caso, todas las modificaciones que se estime pertinentes.

En la práctica, se le entrega al ministerio el poder de decidir quienes pueden ingresar y quienes deben ser eliminado de las escuelas de formación, así como definir el cuerpo docente.

Lo anterior no solo es complejo porque estas definiciones deben ser técnicas, sino porque además se presta para una evidente intervención política en este tema.

Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá coordinar con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como con la Subsecretaría de Educación Superior, quienes emitirán un informe previo, pronunciándose sobre dichos programas y planes de estudio.

- j. Supervigilar el cumplimiento de los planes de formación educacional y de capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
- k. **Supervigilar las modificaciones de la estructura organizacional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública**, aprobando dichos cambios de acuerdo a un reglamento expedido por el Ministerio para dichos efectos, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad pública y perspectiva de género, en conformidad a los planes estratégicos de desarrollo policial y los planes anuales de gestión operativa y administrativa.

No queda claro si esta función ya existe en el actual Ministerio de Interior. En caso de no existir, se recomienda rechazarlo, ya que se le entregará una nueva función y la autoridad de definir como se organizará territorialmente las policías.

- l. **Ordenar al General Director o Director General, según corresponda, que el superior jerárquico respectivo inicie la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción**, pudiendo exigir cuenta de su avance y, en su caso, poner antecedentes en conocimiento de la justicia. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán comunicar al Ministerio, mensualmente, las resoluciones que dieron inicio a procedimientos disciplinarios, así como las que les pusieron término, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República. Estas comunicaciones serán

siempre de carácter secreto.

Esta atribución no tiene sentido ya que, por normativa, en caso de infracción siempre se realizará un procedimiento disciplinario.

Se considera que este punto solo tiene la intención de reforzar la autoridad del Ministerio de Seguridad sobre las policías, lo cual resulta innecesario.

- m. Requerir cualquier otra información a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, aun aquella de carácter reservado, incluyendo antecedentes o documentos que digan relación con inteligencia policial, y que sean necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones y atribuciones.
- n. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden.

TABLA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
SESIÓN ESPECIAL DEL MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022

A.- FÁCIL DESPACHO

1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Sultanato de Omán sobre Exención Mutua de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Especiales, de Servicio y Oficiales, suscrito en El Cairo, República Árabe de Egipto, el 22 de marzo de 2022. (Boletín Nº 15.152-10). Segundo trámite constitucional. **Votación en general y en particular.**

Se recomienda votar a favor.

2.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Japón sobre licencias de conductor, suscrito en Santiago, Chile, el 22 de abril de 2022. (Boletín Nº 15.328-10). Segundo trámite constitucional. **Votación en general y en particular.**

Se recomienda votar a favor.

3.- Proyecto de ley sobre publicidad de las sesiones de los consejos regionales y concejos municipales. (Boletines Nos 14.266-06, 14.250-06, y 15.123-06, refundidos). Tercer trámite constitucional. **Votación única.**

Se recomienda votar a favor.

B.- TABLA ORDINARIA

1.- Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. (Boletines Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.58807, refundidos). Segundo Trámite Constitucional. Moción del Presidente de la República (S. Piñera). **Votación en Particular.**

Combatir el narcotráfico y el crimen organizado, mediante la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Se recomienda votar a favor.

2.- Proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica. (Boletines Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos). Primer trámite constitucional. Moción de los senadores Coloma, van Rysselberghe, Kusanovic, castro y Walker. **Votación en general.**

Prevenir la venta de vehículos robados sancionando y aumentando la sanción de una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales. Además, se establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de los delitos.

Se recomienda votar a favor.

TABLA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
SESIÓN ORDINARIA DEL MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

A.- FÁCIL DESPACHO

1.- Aprueba el 'Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento', el 'Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile e incorporación de la República de Chile como país miembro' y el 'Convenio de suscripción de acciones de capital de garantía entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile' adoptado el 7 de febrero de 1968 y suscritos con fecha 23 de junio de 2022, respectivamente. (Boletín 15433-10) mensaje del presidente de la República (G. Boric) **Votación informe comisión mixta.**

Se recomienda votar en contra.

B.- TABLA ORDINARIA

1.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, solicite el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

Se recomienda votar a favor.

2.- Proyecto de ley que extiende transitoriamente el permiso postnatal parental. (Boletín N° 15.418-13) Tercer trámite constitucional. Mensaje del presidente de la República (G. Boric). **Votación única.**

El proyecto busca otorgar el derecho a los trabajadores de decidir si extender transitoriamente su permiso postnatal parental hasta el 30 de noviembre de 2022, cuando se encuentren haciendo uso de este derecho y su término ocurra entre el 01 de octubre y el 29 de noviembre de 2022. Adicionalmente, a este beneficio podrán acceder también quienes hayan regresado a sus funciones, tras la finalización del permiso postnatal, en las condiciones que indica. Asimismo, se aplicará a las personas beneficiarias del postnatal parental extendido por la ley N° 21.474 y que no hubieran completado los sesenta días continuos establecidos en su artículo 8, de la forma que indica.

Se recomienda votar a favor.

TABLA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
SESIÓN ESPECIAL DEL MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2022

A.- FÁCIL DESPACHO

1.- Proyecto de ley, en, que establece el Día Nacional de la Diversidad. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 8.203-24). Segundo trámite constitucional. Moción de los exdiputados Ascencio, Cornejo, León, Lorenzini, Ojeda, Saffirio, Silber, Vallespín y Walker. **Votación en general y particular.**

El proyecto tiene como objetivo establecer el 16 de noviembre de cada año el Día Nacional de la Diversidad.

Se recomienda votar en contra o abstención.

B.- TABLA ORDINARIA

1.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual solicita la ratificación del Senado para nombrar como integrante del Consejo Consultivo Previsional al señor Andras Uthoff Botka por el tiempo que resta hasta el 11 de febrero de 2025. (Boletín N° S 2.318-05)

Se recomienda votar a favor.

2.- Proyecto de ley que extiende transitoriamente el permiso postnatal parental. (Boletín N° 15.418-13) Tercer trámite constitucional. Mensaje del presidente de la República (G. Boric). **Votación única.**

El proyecto busca otorgar el derecho a los trabajadores de decidir si extender transitoriamente su permiso postnatal parental hasta el 30 de noviembre de 2022, cuando se encuentren haciendo uso de este derecho y su término ocurra entre el 01 de octubre y el 29 de noviembre de 2022. Adicionalmente, a este beneficio podrán acceder también quienes hayan regresado a sus funciones, tras la finalización del permiso postnatal, en las condiciones que indica. Asimismo, se aplicará a las personas beneficiarias del postnatal parental extendido por la ley N° 21.474 y que no hubieran completado los sesenta días continuos establecidos en su artículo 8, de la forma que indica.

Se recomienda votar a favor.

3.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 21.325, Ley de Migración y Extranjería, con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 15.409-06). Primer trámite constitucional. Mensaje del Presidente de la República (G. Boric). **Votación en general y particular.**

El proyecto busca ofrecer formas alternativas a la notificación personal al inicio del procedimiento de expulsión, por medio de carta certificada o vía correo electrónico, al domicilio o correo electrónico previamente informados por la persona extranjera.

Se recomienda votar a favor.

4.- Proyecto de ley que regula las prácticas intermedias y profesionales. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 14.555-04). Primer trámite constitucional. Moción de los Senadores Ebensperger, Coloma, Quintana y Sandoval, y el exsenador Alvarado. **Votación en general y particular.**

El proyecto busca prohibir exigencias ajenas al proceso de enseñanza-aprendizaje a propósito de las prácticas intermedias y profesionales, específicamente, la obligación de los estudiantes de convocar a sus respectivos pacientes para aprobarlas, en aquellos casos en que se requiera la evaluación, diagnóstico o tratamiento de personas.

Se recomienda votar a favor.

TABLA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
SESIÓN ORDINARIA DEL MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2022

A.- TABLA ORDINARIA

1.- Proyecto de ley que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud que indica, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda, con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia de Covid-19. (Boletín N° 14.257-11) Segundo trámite Constitucional. Moción de los diputados Cariola, Castro González, Celis Araya, Celis Montt, Crispi, Parra, Rosas y Torres.

La idea matriz del proyecto es dar por cumplidos aquellos procesos de formulación y evaluación del sistema público de salud que dan lugar al pago de asignaciones y bonificaciones asociados a metas sanitarias y trato al usuario, en consideración a la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública con ocasión de la epidemia o pandemia a que ha dado lugar el virus SARS-CoV-2.

Se recomienda votar a favor.

2.- Veto al proyecto de ley que introduce un nuevo Párrafo en el Título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes. (Boletín N° 14440-07) Discusión veto presidencial. Mensaje del presidente de la república (S. Piñera) **Votación en particular.**

De acuerdo con el Ejecutivo, los cambios que se proponen en el veto se refieren, por una parte, a la actualización de referencias o remisiones de una norma a otros artículos y, por otra, a la inclusión del artículo 367 septies, creado por el proyecto, en el estatuto general de delitos sexuales contra NNAs.

Se recomienda votar a favor.

3.- Proyecto de ley que sanciona delitos en contra del medio ambiente. (Boletines Nos 9.367-12, 5.654-12, 8.920-07, 11.482-07, 12.121-12 y 12.398-12, refundidos) primer trámite constitucional. Moción de los ex senadores, Girardi, Horvarth, Navarro, Walker y el senador de Urresti. **Votación en general.**

El proyecto tiene por objeto crear delitos de grave contaminación y daño ambiental dolosos y culposos, establecer reglas que permitan excluir la sanción penal de la bagatela, incluir delitos de burla del sistema administrativo de protección del medio ambiente, considerar reglas

de responsabilidad de los directivos de empresas y de las personas jurídicas y proponer otras reglas especiales.

Se recomienda votar a favor.

4.- Proyecto de ley que modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos. (Boletín N° 12.465-21). Segundo trámite constitucional. Moción de los diputados, Calisto, Berger, Castro, Celis, Cid, Longthon, Núñez, Ossandón, Prieto y Romero. **Votación en general.**

El proyecto busca aumentar las penas asociadas al delito de quien emplee, utilice o se valga de elementos explosivos o tóxicos en la realización de actividades pesqueras extractivas, tanto en su multa como en las penas privativas de libertad. Y penalizar a quien comercialice, procese, elabore, transporte o almacene a título oneroso recursos hidrobiológicos capturados o extraídos con los elementos explosivos o tóxicos.

Se recomienda votar a favor.

TABLA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
SESIÓN ESPECIAL DEL MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

A.- FÁCIL DESPACHO

1.- Proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, con el objeto de eximir del requisito de orden médica a quienes soliciten la realización del examen preventivo de mamografía. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 15.474-11). Primer trámite constitucional. Moción de los Senadores Castro González, Carvajal, Pascual, Chahuán y Elizalde. **Votación en general y particular.**

El objetivo del proyecto de ley es eximir, permanentemente, del requisito de orden médica para la realización del examen preventivo de mamografía, realizado en establecimientos de salud públicos y privados, tanto en cobertura Fonasa como de Isapres.

Se recomienda votar a favor.

2.- Proyecto de ley que renueva la vigencia de la ley N° 21.031, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones de Bomberos de Chile. (Boletín N° 15.432-14). Primer trámite constitucional. Moción de los Senadores Espinoza, Gatica, Pascual, Kusanovic y Sandoval. **Votación en general.**

El proyecto busca renovar la vigencia de la Ley N°21.031, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones de Bomberos de Chile, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Se recomienda votar a favor.

3.- Proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y Rumanía”, suscrito en Santiago, el 26 de febrero de 2021. (Boletín N° 15.332-10). Segundo trámite constitucional. **Votación en particular.**

El Convenio tiene por objeto regular las relaciones en el campo de la Seguridad Social, particularmente los sistemas de pensiones de ambos países, evitando la doble cotización previsional internacional.

Se recomienda votar a favor.

B.- TABLA ORDINARIA

1.- PRESUPUESTO DE LA NACIÓN. INFORME COMISIÓN MIXTA

2.- Proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares. (Boletines Nos 13.212-07 y 13.213-07, refundidos) Segundo trámite constitucional. **Votación en particular.**

El proyecto busca restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares.

Se recomienda votar a favor.

TABLA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
SESIÓN ORDINARIA DEL MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

A.- SESIÓN ESPECIAL (De 15:00 A 16:00)

1.- RATIFICACIÓN PROPUESTA DE FISCAL NACIONAL JOSÉ MORALES

B.- SESIÓN ORDINARIA

A.- FÁCIL DESPACHO

1.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, para incorporar el libro electrónico. (Boletín N° 12.95904). primer trámite constitucional. Mensaje del ejecutivo (S. Piñera). **Votación en particular.**

El proyecto busca reconocer al libro en soporte electrónico o digital en la ley N° 19.227 - que crea Fondo Nacional del Libro y la Lectura, y modifica cuerpos legales que señala-, posibilitando el desarrollo de los textos en armonía con las nuevas tecnologías y adecuándolos a las distintas alternativas de formato.

Se recomienda votar a favor.

B.- TABLA ORDINARIA

1.- Proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares. (Boletines Nos 13.212-07 y 13.213-07, refundidos). segundo trámite constitucional. **Votación en Particular.**

El proyecto busca restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares.

Se recomienda votar a favor.

2.- Proyecto de ley en que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para suprimir la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile. (Boletín N° 15.016-15). Segundo trámite constitucional. **Votación en general.**

El proyecto busca modificar el régimen de excepciones a la prohibición general de circulación sin patente, eliminando la que habilita a los vehículos nuevos, internados al país o adquiridos en una empresa importadora o comercializadora, a circular durante 5 días con el comprobante contable de la adquisición, prescribiendo que todos los vehículos motorizados nuevos que se comercialicen en el país deberán entregarse por parte de las empresas

comercializadoras con su solicitud de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados y con las placas patentes únicas instaladas. Además, se establece una sanción para los comercializadores que no cumplan con dicha obligación.

Se recomienda votar a favor.

3.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. (Boletín No 11.140-12). segundo trámite constitucional. **Votación en particular.**

La iniciativa de ley tiene por objeto modificar la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas como latentes o saturadas durante el periodo que media entre la declaración de zona y la dictación de un plan de prevención o descontaminación.

Se recomienda votar en contra.

4.- Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica. (Boletín N°14.905-21) Segundo trámite Constitucional. Moción del diputado Leonidas Romero. **Votación en general.**

El proyecto de ley establece una modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos sardina común y anchoveta, desde las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

Se recomienda votar a favor.

5.- Proyecto de ley que modifica el artículo 20 de la ley N° 20.529, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con el objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje. (Boletín N° 11.553-04). Primer trámite constitucional. Moción de la Senadora señora Allende y de los exsenadores Montes, Bianchi, Guillier y Navarro. **Votación en General.**

El proyecto busca establecer nuevos mecanismos que precisen la forma de entrega y presentación de los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje.

Se recomienda votar en contra.